



Junta General
del Principado de Asturias

XII LEGISLATURA

SESIÓN DEL PLENO (EXTRAORDINARIA)

NÚMERO 43

(14 de julio de 2025)

ASUNTO ÚNICO

Enmienda de totalidad al «Proyecto de Ley del Principado de Asturias de novena modificación de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, y de medidas legales sectoriales de simplificación administrativa» (12/0142/0009/14556)

Texto articulado 2

Enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular 42



Junta General del Principado de Asturias

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de novena modificación de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, y de medidas legales sectoriales de simplificación administrativa (12/0142/0009/14556)

(Admitido a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 15 de abril de 2025 y publicado en el Boletín Oficial de la Junta General, serie A, número 25.1, de 16 de abril de 2025).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tras la promulgación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración del Principado de Asturias, en uso de la facultad recogida en el artículo 10 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobó la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, en la que se regulan las especialidades de la organización y funcionamiento de la Administración autonómica.

Desde su aprobación, son numerosas las modificaciones que ha experimentado la normativa básica, que concluyen con la derogación de la propia Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En síntesis, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación del citado texto normativo, reformuló varios aspectos sustanciales del procedimiento administrativo, tales como el silencio administrativo, el procedimiento de revisión de actos administrativos o el régimen de responsabilidad patrimonial de las Administraciones, lo que permitió incrementar la seguridad jurídica a las personas interesadas. Además, el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación ha incidido profundamente en la forma y el contenido de las relaciones de la Administración con los ciudadanos y empresas, plasmándose legislativamente en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, la cual les otorga carta de naturaleza legal, al establecer el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones públicas, quedando obligadas a dotarse de los medios y sistemas necesarios para que ese derecho pueda ejercitarse de manera efectiva.

Por último, las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, derogan la hasta entonces Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, así como la citada Ley 11/2007, de 22 de junio, implicando una profunda reforma del ordenamiento jurídico-administrativo español, siendo dos los ejes principales sobre los que se articula: de un lado, las relaciones *ad extra*, cuyo régimen jurídico se contiene en la primera de las normas, y, de otro, las relaciones *ad intra*, en cuya regulación se centra la segunda de ellas.

El proceso de modificación descrito de la legislación básica en la materia aconseja una revisión de la ley asturiana. El título I de la presente ley aborda esta modificación, al objeto de incorporar y adaptar a las singularidades autonómicas las novedades del vigente marco normativo. Asimismo, se introduce una regulación de los órganos colegiados de la Administración del Principado de Asturias, se modifica la regulación del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, se introducen cambios en la sistemática de la norma y medidas de simplificación administrativa.

La presente ley apuesta por una Administración digital, ágil, tecnológica, más cercana a la ciudadanía y proactiva. Los servicios proactivos pueden consistir en el envío de comunicaciones de apertura de procedimientos en materia de interés de las personas, envíos de información particularizada sobre servicios de la Administración del Principado de Asturias, la confección de borradores de solicitud que habrán de ser confirmados por la persona interesada dentro del procedimiento o servicio de que se trate o cualquier otro que supongan un posible beneficio para el interesado o la interesada o anticiparse a una necesidad en el marco de un procedimiento o servicio público.



Junta General del Principado de Asturias

La aplicación de medios digitales a los procedimientos administrativos y servicios en la Administración del Principado de Asturias tendrá por objeto simplificar y agilizarlos procedimientos, así como prestar servicios públicos digitales personalizados y fáciles de usar, aplicando medidas innovadoras desde el diseño y garantizando la seguridad de los datos y de las actuaciones del procedimiento.

La implantación de medios digitales exigirá una revisión integral y preceptiva del procedimiento de que se trate y su normativa de aplicación, para adecuarlo a un funcionamiento electrónico, lo que conllevará un rediseño funcional, la racionalización de cargas y la necesaria simplificación de trámites y actuaciones.

En este título es de destacar la inclusión de una disposición adicional novena en orden a establecer el plazo máximo de tramitación y resolución de los procedimientos de resolución de contratos en el ámbito de las entidades locales. Esta nueva disposición adicional atiende a la moción sobre el plazo de los procedimientos de resolución contractual aprobada por el Pleno del Consejo Consultivo en sesión celebrada el 4 de noviembre de 2021, en la que se recomienda la tramitación y aprobación de una disposición de rango legal que fije el expresado plazo en ocho meses para la Administración del Principado de Asturias, las entidades locales de su territorio y sus respectivas entidades vinculadas o dependientes.

Por su parte, el título II recoge las medidas de simplificación administrativa aplicables a determinados procedimientos administrativos, mediante la modificación de las correspondientes leyes sectoriales en materia de carreteras, de montes, de patrimonio y de patrimonio cultural.

Se incluyen, asimismo, medidas en materia de subvenciones, que se articulan a través de la modificación del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio. A través de estas se aborda la regulación de la planificación estratégica de las subvenciones que cada Consejería, organismo, entidad o ente dependiente o vinculado a la Administración del Principado de Asturias tenga previsto convocar. Se regula el procedimiento de concesión de las subvenciones, con la posibilidad de acudir a un procedimiento simplificado de concurrencia competitiva, si así lo prevén las bases reguladoras, y al régimen de convocatoria pública abierta. Por último, se regulan la tramitación anticipada de las convocatorias y la tramitación urgente de procedimientos de subvención.

La parte final de esta ley se integra por una disposición transitoria para abordar el régimen transitorio, una derogatoria y ocho finales. Las disposiciones finales primera a cuarta modifican en aspectos muy puntuales, y su vez necesarios, las Leyes del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés; 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración; 1/2023, de 15 de marzo, de Calidad Ambiental; y 2/2024, de 30 de abril, de Impulso Demográfico, respectivamente. La disposición final quinta fija el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley para aprobar los reglamentos del procedimiento sancionador, del Registro Electrónico de Apoderamientos del Principado de Asturias y del Registro de Convenios; en tanto, la disposición final sexta habilita al Consejo de Gobierno para elaborar y aprobar un texto refundido de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo. Por último, las disposiciones finales séptima y octava recogen la habilitación normativa para el desarrollo de esta ley y su entrada en vigor, respectivamente.

La presente ley se ajusta a los principios de buena regulación, recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En concreto, respeta los principios de necesidad y de eficacia, pues es precisa la modificación de la ley vigente para adaptarla a la regulación básica estatal y al contexto actual de las interrelaciones administrativas y con los ciudadanos, resultando necesaria la modificación de las correspondientes leyes sectoriales que recogen medidas de simplificación administrativa, siendo la aprobación de la norma el instrumento idóneo para



conseguir dichos fines. También cumple con el principio de seguridad jurídica, dado que el texto normativo respeta la distribución de competencias constitucional, conteniendo la regulación en una única norma clara, precisa y sistemática y con el principio de eficiencia, evitando cargas administrativas innecesarias o accesorias. Por último, cumple el principio de transparencia, pues se ha dado cumplimiento en su elaboración a todos los trámites procedimentales, así como se ha dado publicidad suficiente respecto de todos los documentos integrantes del referido procedimiento.

TÍTULO I

Modificación de la Ley del Principado de Asturias sobre Régimen Jurídico de la Administración

Artículo 1. *Modificación de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración.*

La Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se añade un inciso final al apartado 1 del artículo 1, con la siguiente redacción:

«En su actuación y relaciones deberá respetar los principios establecidos en la legislación básica de régimen jurídico o procedimiento administrativo.».

Dos. Se modifica el artículo 2, que queda redactado como sigue:

«Artículo 2. Planificación, innovación y proactividad de la Administración del Principado de Asturias.

1. La actividad de la Administración del Principado de Asturias será objeto de planificación y programación.

Las Consejerías, en sus respectivos ámbitos funcionales, dispondrán todo tipo de medidas tales como la planificación estratégica, la planificación por objetivos, el intercambio y gestión de datos, la evaluación de las políticas públicas, la implantación de metodologías para la reducción de las cargas, los costes, los plazos o el tiempo de tramitación.

Las actuaciones así impulsadas estarán sujetas, en todo caso, a la previa definición de los objetivos que las justifiquen, el establecimiento de cuadros de indicadores para la medición del cumplimiento de estos y su posterior evaluación.

2. La Administración del Principado de Asturias fomentará la innovación administrativa, estableciendo espacios y herramientas destinados a tal fin o la puesta en marcha de experiencias piloto.

3. La Administración del Principado de Asturias podrá ofrecer, de forma proactiva, servicios personalizados en el ejercicio de sus funciones y competencias, siempre que dicha proactividad respete el régimen jurídico que resulte de aplicación a cada procedimiento.

4. El tratamiento de los datos de carácter personal necesarios para la prestación de los servicios señalados en el apartado anterior requerirá que la persona interesada preste su consentimiento, en los términos previstos en la normativa de protección de datos personales.».

Tres. Se introduce un nuevo artículo 2 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 2 bis. Promoción de la simplificación administrativa.



Junta General del Principado de Asturias

1. La Administración del Principado de Asturias y su sector público promoverán medidas para la simplificación administrativa.

A tal efecto, en el ejercicio de sus competencias, optarán por las alternativas regulatorias, organizativas, tecnológicas o de gestión procedimental que menos cargas generen a los ciudadanos.

2. El diseño e implementación de medidas de simplificación atenderá, entre otras, a las siguientes finalidades:

- a) Reducción de trámites y mejora de los plazos de emisión de informes y de resolución.
- b) Revisión de las exigencias, en los distintos procedimientos, de aportación de documentación, así como la supresión de las que sean innecesarias; reducción de cargas y costes.
- c) Limitación de los supuestos en los que el silencio tendrá efectos desestimatorios.
- d) Uso de comunicaciones y declaraciones responsables.
- e) Uso de modelos normalizados de formularios y demás documentos administrativos.
- f) Uso de tecnología al servicio de la agilidad procedimental, con herramientas corporativas intuitivas, interoperables y que faciliten la colaboración entre administraciones.
- g) Elaboración de manuales y guías de tramitación, así como de modelos de acto tipo.
- h) Fomento de la agrupación documental.
- i) Actualización y mejora regulatoria.
- j) Impulso de la planificación estratégica de la actividad administrativa.
- k) Formación permanente y específica de los empleados públicos en materia de simplificación administrativa en su triple vertiente: normativa, organizativa y procedimental.
- l) Información específica a la ciudadanía, personas físicas y jurídicas, en materia de simplificación administrativa.

3. La normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios o de su ejercicio solo podrá establecer un régimen de autorización cuando lo exija la legislación básica aplicable o, excepcionalmente, cuando concurra una razón imperiosa de interés general y las condiciones de no discriminación, necesidad y proporcionalidad recogidas en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, y en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.».

Cuatro. Se asigna el número 1 al párrafo actual del artículo 4 y se añade un apartado 2, con la siguiente redacción:

«2. Las personas físicas podrán elegir en todo momento, si se comunican con la Administración del Principado de Asturias y sus organismos que actúen sometidos al derecho público, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no. Dicha elección podrá modificarse en cualquier momento.

La previsión anterior no resultará de aplicación cuando las personas físicas estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos, en los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o cuando lo disponga una norma legal o reglamentaria del Principado de Asturias para ciertos procedimientos o para ciertos colectivos de personas físicas.».



Junta General del Principado de Asturias

Cinco. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:

«Artículo 6. Aportación de documentos al procedimiento administrativo.

1. La aportación de documentos al procedimiento administrativo por las personas interesadas se regirá por lo establecido en la legislación básica de régimen jurídico o procedimiento administrativo.

2. Las personas interesadas deberán aportar los datos y documentos exigidos por la normativa aplicable en cada caso. También podrán aportar cualquier otro documento que estimen conveniente.

3. La Administración del Principado de Asturias no exigirá documentación a las personas interesadas que ya se encuentre en su poder o haya sido elaborada por cualquier otra Administración, pudiendo la Administración consultar o recabar dichos documentos, en los términos establecidos en la legislación básica, siempre que la persona interesada no se opusiera a ello, oposición que no cabe en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.

4. La Administración del Principado de Asturias no exigirá a las personas interesadas la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable disponga lo contrario.

5. La Administración tampoco exigirá a quienes sean interesados datos o documentos que no requiera la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por la persona interesada a cualquier Administración. En estos supuestos, la persona interesada deberá indicar expresamente el expediente o procedimiento en el que los presentó y el órgano responsable de su tramitación, debiendo la Administración del Principado de Asturias consultar o recabar electrónicamente dicha documentación, conforme a lo establecido en la normativa básica, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado o la interesada o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si la Administración no pudiera recabar los citados documentos, podrá solicitar nuevamente su aportación a la persona interesada.

6. La Administración del Principado de Asturias adoptará las medidas tendentes a garantizar, con arreglo a la normativa vigente en materia de protección de datos, y de acuerdo con el régimen jurídico de cada procedimiento, que las personas faciliten solo una vez la misma información, ya sean documentos o datos. A estos efectos se establecerán las medidas que permitan la reutilización interna de aquellos.

7. La Administración del Principado de Asturias pondrá a disposición de las personas, de manera individualizada y con plenas garantías de seguridad, privacidad y protección de datos, la información y datos por ellas suministrados, con el objetivo de que puedan acceder a los mismos o actualizarlos.».

Seis. Se introducen los artículos 6 bis, 6 ter, 6 *quater*, 6 *quinquies*, 6 *sexies* y 6 *septies*, con la siguiente redacción:

«Artículo 6 bis. Sede electrónica del Principado de Asturias.

1. La sede electrónica del Principado de Asturias es la dirección electrónica disponible para la ciudadanía, personas físicas y jurídicas, en los términos establecidos en la legislación básica de régimen jurídico del sector público.

2. La sede electrónica, de titularidad de la Administración del Principado de Asturias, contendrá la información y los servicios que determine la normativa básica y los que reglamentariamente se establezcan.



Junta General del Principado de Asturias

Reglamentariamente, se fijará el ámbito de aplicación de la sede electrónica del Principado de Asturias a los sujetos integrantes del sector público autonómico.

3. Corresponderá a la Consejería con competencias en materia de servicios digitales la responsabilidad de los contenidos y servicios comunes disponibles, la gestión tecnológica y la continuidad, accesibilidad y seguridad de la sede electrónica del Principado de Asturias.

Artículo 6 ter. Presencia en internet y servicios digitales a la ciudadanía.

1. El portal de internet www.asturias.es es la web institucional del Principado de Asturias, constituido por el conjunto de páginas web relacionadas entre sí, estructuradas mediante un sistema de información, de libre acceso y albergadas en la red corporativa del Principado de Asturias.

2. La titularidad del portal corresponde a la Administración del Principado de Asturias.

3. El portal funcionará como Punto de Acceso General de la Administración del Principado de Asturias a los efectos establecidos en la legislación básica de régimen jurídico o procedimiento administrativo.

En el mismo se recogerá, junto con la información institucional de todos los órganos de la Administración del Principado de Asturias, la información administrativa y los servicios en línea facilitados o prestados por la Administración.

Asimismo, dará acceso al Portal de Transparencia y Gobierno Abierto y al resto de portales de internet del sector público autonómico.

4. A través de la web se accederá a un servicio digital donde se ubicará la sede electrónica del Principado de Asturias y a un área personalizada para la ciudadanía, personas físicas y jurídicas, que le permitirá, previo registro y tras la debida identificación y autenticación, acceder a sus datos personales, documentos, notificaciones electrónicas, conocer el estado de tramitación de sus expedientes administrativos y ejercer todos los derechos que se establecen en la legislación básica de procedimiento administrativo.

5. Los distintos órganos de la Administración del Principado de Asturias garantizarán la permanente actualización y veracidad de la información y contenidos de la sede electrónica y del área personalizada, dentro de sus ámbitos competenciales.

Artículo 6 *quater*. Principios generales de los procedimientos y servicios digitales.

Los procedimientos y servicios digitales que se implanten en la Administración del Principado de Asturias deberán respetar los siguientes principios:

a) Principio de «solo una vez»: garantizar que las personas faciliten la misma información una sola vez, en los términos previstos en el artículo 6.

b) Interoperabilidad: deberá garantizarse el cumplimiento de las normas técnicas de interoperabilidad que sean resultado del Esquema Nacional de Interoperabilidad.

c) Seguridad y protección de datos: cumplimiento del marco jurídico sobre la protección de datos personales, la intimidad y la seguridad de la información, integrando estos elementos en la fase de diseño.

d) Innovación y mejora continua: adopción de medidas de innovación que permitan cumplir los objetivos de eficacia, eficiencia y agilidad administrativa, así como someter los procedimientos a controles de cara a proponer mejoras en la gestión.



e) Automatización: preferencia de las actuaciones administrativas automatizadas en los actos o actuaciones que sean susceptibles de ser configuradas como tales en el marco de un procedimiento administrativo.

f) Accesibilidad: diseñar los servicios públicos digitales de tal modo que sean inclusivos y tomen en consideración las necesidades de determinados colectivos, como las de las personas mayores y las personas con discapacidad, de modo que se atienda a los principios de igualdad y no discriminación.

g) Adaptación tecnológica: evolución de las tecnologías y los sistemas informáticos con el fin de que estén permanentemente actualizados en relación con el entorno y el desarrollo tecnológico.

Artículo 6 *quinquies*. Actuación administrativa automatizada.

1. Se entiende por actuación administrativa automatizada, de conformidad con la legislación básica, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.

2. El establecimiento de actuaciones administrativas automatizadas en la Administración del Principado de Asturias requerirá que la Consejería competente en materia de servicios digitales fije, previamente, la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente.

3. El órgano responsable a efectos de impugnación de una actuación automatizada será el competente en el procedimiento de que se trate.

4. La determinación y establecimiento de actuaciones administrativas automatizadas se efectuará mediante resolución de la persona titular de la Consejería competente en el procedimiento de que se trate. En dicha resolución, se indicará el órgano responsable a efectos de impugnación.

Artículo 6 *sexies*. Inteligencia artificial y procedimiento administrativo.

1. La Administración del Principado de Asturias dará debida publicidad y transparencia al uso de inteligencia artificial en el ejercicio de sus funciones. Serán públicas las validaciones realizadas al sistema conforme a la normativa aplicable, los riesgos que implica y cualesquiera otros aspectos que garanticen los derechos de las personas interesadas.

2. Las normas que regulen los procedimientos administrativos harán, en su caso, referencia expresa a la posibilidad de uso de sistemas de inteligencia artificial en la fase que corresponda, tanto en la asistencia en la presentación de solicitudes, declaraciones responsables o comunicaciones, la comprobación o verificación de los requisitos como en la toma de decisiones.

3. Todo procedimiento que prevea el uso de inteligencia artificial como asistencia al mismo fijará el órgano responsable a efectos de impugnaciones.

Artículo 6 *septies*. Archivo electrónico único.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración del Principado de Asturias mantendrá un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados.



Junta General del Principado de Asturias

2. El archivo electrónico será de uso común único para todos los órganos de la Administración del Principado de Asturias y será gestionado por la Consejería competente en materia de servicios digitales.

3. El archivo electrónico garantizará la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección, acceso, disponibilidad y conservación de la documentación.».

Siete. Se modifica el artículo 7, que queda redactado como sigue:

«Artículo 7. Derecho de acceso a la información pública, archivos y registros.

1. El derecho de acceso a la información pública, archivos y registros se ejercerá de acuerdo con lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, sin perjuicio de otras normas especiales que sean de aplicación.

2. La expedición de certificados de asientos o documentación obrante en un registro administrativo de carácter público corresponde a la persona titular de la unidad administrativa a la que esté adscrito, de conformidad con la normativa reguladora en cada caso.

3. La expedición de certificaciones de otros documentos administrativos, a petición de las personas interesadas, fuera de los supuestos establecidos en el apartado anterior, corresponde a quienes sean titulares de las Secretarías Generales Técnicas de la Consejería competente por razón de la materia.

Dichas certificaciones estarán firmadas previamente por la unidad administrativa que disponga de los datos que se certifican.».

Ocho. Se modifica el artículo 8, que queda redactado como sigue:

«Artículo 8. Registro Electrónico General del Principado de Asturias y oficinas de asistencia.

1. La Administración del Principado de Asturias, en los términos establecidos en la legislación básica de régimen jurídico o procedimiento administrativo, dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se practicarán asientos de todos los documentos que sean presentados o recibidos en cualquiera de sus órganos administrativos, organismos públicos o entidades vinculados o dependientes, así como se anotará en el mismo la salida de documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.

2. El Registro Electrónico garantizará, de acuerdo con la legislación básica, la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de presentación, identificación de la interesada o del interesado, órgano administrativo remitente, si procede y persona u órgano administrativo al que se envía, y en su caso, referencia al contenido del documento que se registra.

Asimismo, dicho Registro Electrónico cumplirá con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

3. El Registro Electrónico será plenamente interoperable con el resto de registros electrónicos de las Administraciones públicas, garantizándose su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de ellos.

4. El régimen de las oficinas de asistencia en materia de registro y de la atención ciudadana, tanto a personas físicas como jurídicas, será el establecido reglamentariamente.



Junta General del Principado de Asturias

5. La relación de oficinas de registro propias de la Administración del Principado de Asturias, así como la relación de oficinas de registro concertadas y sus sistemas de acceso y comunicación y horario de funcionamiento, se hará pública por resolución de la Consejería competente.

6. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de que las personas interesadas puedan utilizar cualesquiera de las formas presentación de documentación establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.».

Nueve. Se introduce un artículo 8 bis, con el siguiente contenido:

«Artículo 8 bis. Registros electrónicos de apoderamientos.

1. La Administración del Principado de Asturias dispondrá de un Registro Electrónico General de Apoderamientos, en los términos establecidos en la legislación básica de régimen jurídico o procedimiento administrativo. Reglamentariamente, se regulará su régimen jurídico y funcionamiento.

No obstante, cada organismo o entidad de derecho público vinculado o dependiente de la Administración del Principado de Asturias podrá tener su propio registro electrónico de apoderamientos.

2. Sin perjuicio de lo anterior, podrán regularse mediante decreto registros de apoderamientos particulares en los que se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en un determinado ámbito.

3. Los registros regulados en el presente artículo tendrán, en todo caso, el carácter de interoperables con los análogos de todas y cada una de las Administraciones públicas, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos, en los términos establecidos en la normativa básica.».

Diez. Se modifica el apartado 1 del artículo 9, quedando redactado de la siguiente manera:

«1. Cada procedimiento administrativo, aun cuando en el mismo intervengan diversos órganos de la Administración del Principado de Asturias, integrará un único expediente electrónico, que estará formado por el conjunto ordenado de actuaciones y documentos electrónicos que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

Los documentos electrónicos que formen parte de los expedientes de la Administración del Principado de Asturias son la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada un en soporte electrónico, según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado admitido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente, y que haya sido generada, recibida o incorporada por los órganos de la Administración autonómica en el ejercicio de funciones sujetas a derecho administrativo. En este concepto de documentos electrónicos quedarán incluidos los datos de carácter personal de los posibles interesados o interesadas en el expediente, los datos de gestión incorporados al procedimiento respectivo, así como cualquier información estructurada y en formato electrónico obtenida o generada en el desarrollo de las funciones y competencias de los distintos órganos de la Administración del Principado de Asturias.».

Once. Se modifica el título del capítulo II, quedando redactado de la siguiente manera:



Junta General del Principado de Asturias

«De las relaciones de la Administración del Principado de Asturias con otras Administraciones públicas y de los convenios».

Doce. Se modifica el artículo 11, quedando redactado como sigue:

«Artículo 11. Convenios.

1. La Administración del Principado de Asturias, en el ámbito de sus competencias, podrá celebrar convenios con otras Administraciones públicas, con organismos públicos y entidades de derecho público, vinculados o dependientes, o con las universidades públicas o con sujetos de derecho privado para un fin común.

2. Corresponde al Consejo de Gobierno la autorización de la celebración, modificación, prórroga o extinción de aquellos convenios que incluyan compromisos de gasto o con repercusión económica, excepto lo dispuesto en el apartado siguiente. También designará a quien haya de representar a la Administración para su suscripción, salvo que dicha representación vaya a ser asumida por el presidente del Principado de Asturias.

Dicha competencia del Consejo de Gobierno podrá atribuirse a las comisiones delegadas con relación a convenios sobre materias que a las mismas correspondan.

3. La autorización para la celebración, modificación, prórroga o extinción de aquellos convenios que no supongan compromisos de gasto ni repercusión económica o mediante los que se instrumente la concesión de subvenciones nominativas consignadas en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias corresponderá a la persona titular de la Consejería competente por razón de la materia, que, en representación de la Administración, podrá suscribirlos o designar para su suscripción a quien sea titular de un órgano central de la misma Consejería, sin perjuicio de que puedan ser firmados por la persona titular de la Presidencia del Principado de Asturias, si se considerase oportuno por su relevancia institucional.

En todos estos casos, se dará cuenta al Consejo de Gobierno en el plazo de un mes desde la suscripción del convenio correspondiente.

4. La suscripción de convenios de colaboración que impliquen obligaciones financieras para la Comunidad Autónoma exigirá la previa existencia de crédito suficiente. En aquellos convenios que supongan la adquisición de compromisos de gasto para ejercicios futuros, se estará a lo dispuesto en la normativa específica.

5. El régimen jurídico de los convenios será el establecido en la normativa básica de régimen jurídico o procedimiento administrativo, debiendo venir acompañados necesariamente de una memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad o prestación objeto del mismo, así como el cumplimiento de lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

6. Los instrumentos de formalización de los convenios deberán especificar, cuando así proceda:

- a) Los órganos que celebran el convenio y la capacidad jurídica con la que actúa cada una de las partes.
- b) La competencia que ejerce cada parte.
- c) Las actuaciones que se acuerde desarrollar para su cumplimiento.
- d) Su financiación.
- e) La composición de un órgano mixto de vigilancia y control que resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.



Junta General del Principado de Asturias

f) El plazo de vigencia, lo que no impedirá su prórroga si así lo acuerdan las partes firmantes del convenio.

g) La extinción por causa distinta a la prevista en la letra anterior, así como la forma de terminar las actuaciones en curso para el supuesto de extinción.

7. La modificación de los convenios, así como las posibles prórrogas se formalizarán a través de adendas a los mismos.

8. Todos los convenios de colaboración que se suscriban al amparo de este artículo deberán ser inscritos en el registro de convenios de la Comunidad Autónoma y publicados en el *Boletín Oficial del Principado de Asturias*.

9. La eficacia de los convenios suscritos con la Administración General del Estado o algunos de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes se regirá por lo dispuesto en la legislación básica. El resto de convenios suscritos por la Administración del Principado de Asturias resultarán eficaces una vez se hayan inscrito en el registro de convenios de la Comunidad Autónoma y publicados en el *Boletín Oficial del Principado de Asturias*.

10. No tendrán la consideración de convenios los protocolos generales de actuación o instrumentos similares a que se refiere el artículo 11 bis.

11. Los organismos públicos o entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración del Principado de Asturias se regirán por lo dispuesto en sus normas reguladoras y, en su defecto, por lo dispuesto en este artículo.».

Trece. Se introduce un artículo 11 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 11 bis. Protocolos generales de actuación.

«1. Corresponde a las personas titulares de las Consejerías competentes por razón de la materia autorizar la celebración de protocolos generales de actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o expresen la voluntad de la Administración y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos.

2. Cuando el protocolo general de actuación o instrumento similar afectase a ámbitos competenciales de varias Consejerías, la autorización a que se refiere el apartado anterior corresponderá al Consejo de Gobierno.».

Catorce. Se introduce un artículo 11 ter, con el siguiente contenido:

«Artículo 11 ter. Registro de Convenios.

«1. La Consejería con competencias en materia de Administración pública y régimen jurídico llevará el Registro de Convenios, en el que se inscribirán y depositarán todos los convenios suscritos por la Administración del Principado de Asturias.

2. Reglamentariamente, se establecerá el régimen jurídico y funcionamiento de dicho registro.».

Quince. Se modifica el artículo 12, quedando con la siguiente redacción:

«Artículo 12. De los convenios con otras comunidades autónomas.

La celebración por el Principado de Asturias de convenios con otras comunidades autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de su competencia y el establecimiento de acuerdos de cooperación con las mismas exigirá la previa autorización de la Junta General del Principado de Asturias para prestar el consentimiento y la comunicación a las Cortes Generales,



Junta General del Principado de Asturias

en los términos establecidos en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. La tramitación de la citada autorización se regirá por lo establecido en el Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias.».

Dieciséis. Se modifica el apartado 4 del artículo 13, que queda redactado de la siguiente manera:

«4. No podrán crearse en la Administración del Principado de Asturias nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si, al mismo tiempo, no se suprime o restringe debidamente la competencia y demás elementos integrantes de éstos. A este objeto, la creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la Administración del Principado de Asturias que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población.».

Diecisiete. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 15 y se introduce un apartado 5, siendo su redacción la siguiente:

«3. Las competencias de las personas titulares de las Consejerías podrán ser delegadas por ellas en quienes lo sean de las Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas, Intervención General y las Direcciones Generales y, en su caso, de las Jefaturas de Servicio.

Asimismo, podrá acordarse tanto en favor de órganos jerárquicamente dependientes de la persona titular de la Consejería delegante, como en otros que no tengan tal dependencia, cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión, así como en los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración del Principado de Asturias.

4. Las competencias de las personas titulares de las Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas, y Direcciones Generales serán delegables en quienes sean titulares de las Jefaturas de Servicio dependientes de las mismas.».

«5. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:

- a) Los asuntos que, por razón de la materia, hayan de someterse al acuerdo o conocimiento del Consejo de Gobierno.
- b) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Junta General del Principado, presidente del Principado, autoridades y órganos del Estado y de las demás comunidades autónomas.
- c) La adopción de disposiciones de carácter general.
- d) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.
- e) La revocación de los actos de gravamen o desfavorables.
- f) La revisión de oficio de las disposiciones y actos nulos, así como la declaración de lesividad de los actos anulables.
- g) Las materias en que así se determine por una ley del Principado de Asturias.».

Dieciocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 16 y se introducen los apartados 5 y 6, con la siguiente redacción:

«1. La delegación de competencias se efectuará por resolución del órgano delegante. En los supuestos en que la delegación se vaya a realizar en favor de órganos que no sean jerárquicamente dependientes, será preceptivo el informe previo favorable del titular de la Consejería de que dependan y, en su defecto, la autorización del Consejo de Gobierno. Si la delegación lo fuera en los organismos o entidades de derecho público vinculados o dependientes



de la Administración del Principado de Asturias, deberá ser aprobada previamente por el órgano máximo de dirección, de acuerdo con sus normas de creación.

Será preceptiva la autorización previa de la persona titular de la Consejería de que dependan para efectuar la delegación de las competencias de las personas titulares de las Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales.».

«5. Salvo que en el acto de delegación de competencias se disponga otra cosa, la resolución de los recursos de reposición que, en su caso, se interpongan contra los actos dictados por delegación corresponderá al órgano delegado.

6. La delegación de competencias no perderá su eficacia por cambio del titular del órgano delegante o delegado.

En los supuestos de reestructuración administrativa, salvo revocaciones expresas, las delegaciones de competencias continuarán siendo válidas respecto a los titulares de los órganos en cuyo ámbito se encuadre la respectiva competencia.

Cuando los órganos delegados hubieran sido suprimidos, la referida delegación se entenderá vigente respecto a aquellos otros a los que corresponda el ejercicio de la misma competencia.».

Diecinueve. Se modifica el apartado 3 del artículo 17, quedando con la siguiente redacción:

«3. La avocación se realizará mediante resolución motivada del órgano competente, que deberá ser notificada a las personas interesadas en el procedimiento, si las hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte.

Contra la resolución de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.».

Veinte. Se modifica el artículo 18, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 18. Encomienda de gestión.

1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos de la Administración del Principado de Asturias o de las entidades de derecho público vinculadas o de ella dependientes podrá ser encomendada a otros órganos o entidades de la misma o de distinta Administración siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos, personales o materiales idóneos para su desempeño, en los términos y con el carácter previsto en la legislación básica del régimen jurídico o procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.

2. La encomienda de gestión a órganos pertenecientes a la misma Consejería o a entidades públicas vinculadas o dependientes de ella, será autorizada por el titular de la Consejería competente.

3. Para la encomienda de gestión a órganos o a entidades públicas, vinculadas o dependientes de diferente Consejería o de distinta Administración pública, será precisa la autorización por el Consejo de Gobierno.

4. En los supuestos de encomienda de gestión a órganos de la misma o de distinta Consejería de la Administración del Principado, servirá de instrumento de formalización la resolución o acuerdo que la autorice. En los demás supuestos, la encomienda se formalizará mediante la firma del correspondiente convenio.

5. Para su efectividad, el instrumento en que la encomienda de gestión se formalice deberá ser publicado en el *Boletín Oficial del Principado de Asturias*. En todo caso, será contenido mínimo del mismo:



Junta General del Principado de Asturias

- a) La actividad o actividades a que afecten.
- b) La naturaleza y alcance de la gestión encomendada.
- c) El plazo de vigencia y los supuestos en que proceda la finalización anticipada de la encomienda o su prórroga.

6. La encomienda de la gestión de actividades que sean competencia de otras Administraciones públicas en favor de órganos administrativos o entidades públicas pertenecientes o dependientes de la Administración del Principado de Asturias requerirá la previa aceptación del Consejo de Gobierno y será formalizada mediante la firma del correspondiente convenio, que, en todo caso, habrá de ser publicado en el *Boletín Oficial del Principado de Asturias*.».

Veintiuno. Se introduce un artículo 19 bis, con el siguiente contenido:

«Artículo 19 bis. Suplencia.

1. Las personas titulares de los órganos administrativos de la Administración del Principado de Asturias podrán ser suplidas temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que se haya declarado su abstención o recusación.

2. La suplencia de los órganos superiores de la Administración del Principado de Asturias se regirá por lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración, y la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno.

La designación de suplentes de quienes sean titulares de los demás órganos de la Administración del Principado de Asturias podrá efectuarse en los decretos de estructura orgánica básica de cada Consejería o por resolución del órgano competente para el nombramiento del titular. En defecto de designación, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa.

3. La suplencia no implicará alteración de la competencia y no será precisa para su validez la publicación en el *Boletín Oficial del Principado de Asturias*.

4. En las resoluciones y actos que se adopten por suplencia, se hará constar esta circunstancia, anteponiéndose a la firma la expresión «por suplencia» o su forma usual de abreviatura y especificando el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo la suplencia.».

Veintidós. Se introduce una sección 3.^a en el capítulo III y se incluyen en dicha sección los nuevos artículos 19 ter, 19 *quater* y 19 *quinques*, siendo su redacción la siguiente:

«Sección 3.^a Órganos colegiados.

Artículo 19 ter. Régimen jurídico.

1. Los órganos colegiados de la Administración del Principado de Asturias y de sus organismos públicos se regirán por las disposiciones que sobre dichos órganos se contienen en la legislación básica de régimen jurídico o procedimiento administrativo, por las normas establecidas en esta sección, por su norma o convenio de creación y por sus reglamentos de régimen interior.

2. Los órganos colegiados en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas Administraciones públicas, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.

Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en la Administración autonómica, aunque sin participar en la estructura jerárquica de esta, salvo que así lo



establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado.

Artículo 19 *quater*. Constitución y composición de los órganos colegiados.

1. Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por tres o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control y que actúen integrados en la Administración del Principado de Asturias o alguno de sus organismos públicos.

2. La constitución de un órgano colegiado en la Administración del Principado de Asturias tiene como presupuesto indispensable la determinación en su norma de creación, o en el convenio suscrito al efecto con otras Administraciones públicas, de los siguientes extremos:

- a) Sus fines u objetivos.
- b) Su integración administrativa o dependencia jerárquica.
- c) La composición y los criterios para la designación de su presidencia y de los restantes miembros.
- d) Las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como cualquier otra que se le atribuya.
- e) La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento.

3. Podrán formar parte de los órganos colegiados representantes de otras Administraciones públicas siempre que lo acepten voluntariamente, cuando un convenio así lo establezca o cuando una norma aplicable a las Administraciones afectadas lo determine.

También podrán participar en la composición del órgano colegiado, cuando así se determine, organizaciones representativas de intereses sociales, así como otros miembros que se designen por las especiales condiciones de experiencia o conocimientos que concurren en ellos, en atención a la naturaleza de las funciones asignadas a tal órgano.

Artículo 19 *quinquies*. Creación, modificación y supresión de órganos colegiados.

1. La creación de órganos colegiados de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos públicos requerirá de norma específica, la cual revestirá la forma de decreto y deberá publicarse en el *Boletín Oficial del Principado de Asturias* y en el portal de transparencia, cuando al órgano colegiado se le atribuyan cualquiera de las siguientes competencias:

- a) Competencias decisorias.
- b) Competencias de propuesta.
- c) Competencias de emisión de informes que deban servir de base a decisiones de otros órganos administrativos.
- d) Competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la Administración del Principado de Asturias.

2. En el resto de supuestos no comprendidos en el apartado anterior, podrán crearse por acuerdo del Consejo de Gobierno o, si afectase a una sola Consejería, por resolución de la persona titular de la misma, debiendo publicarse en ambos casos en el portal de transparencia.

Estos órganos colegiados tendrán el carácter de grupos o comisiones de trabajo cuando hayan sido creados para un asunto o fin determinado, siempre que sus funciones, exclusivas o



Junta General del Principado de Asturias

principales, no sean de consulta o participación y de ellas no puedan derivarse decisiones o acuerdos que tengan efectos jurídicos frente a terceros.

3. Adicionalmente, la Administración podrá publicar las normas de creación de los órganos colegiados y sus normas de funcionamiento en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento.

4. La modificación y supresión de los órganos colegiados y de los grupos o comisiones de trabajo de la Administración del Principado de Asturias y de sus organismos públicos se llevará a cabo en la misma forma dispuesta para su creación, salvo que en el momento de su creación se hubiera fijado un plazo para su extinción, en cuyo caso esta se producirá automáticamente.».

Veintitrés. Se introduce un capítulo III bis, con la siguiente redacción:

«CAPÍTULO III bis. Colaboración en la intervención administrativa

Sección 1.^a Entidades colaboradoras de certificación

Artículo 19 *sexies*. Acreditación de entidades colaboradoras de certificación.

1. Cuando la normativa sectorial de aplicación establezca la intervención de entidades colaboradoras de certificación, la acreditación y correspondiente inscripción registral de estas corresponderá a la Consejería competente en materia de Administración pública y régimen jurídico, excepto que dicha normativa sectorial atribuya la facultad a la Consejería competente por razón de la materia.

2. Para obtener la acreditación a que se refiere el apartado anterior, las entidades solicitantes deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos:

- a) Disponer de los medios materiales y humanos exigidos por la Administración.
- b) No estar suspendidas ni tener prohibido el desarrollo de la actividad de certificación en virtud de resolución administrativa o judicial firme.
- c) Tener suscrita y en vigor una póliza de cobertura de los riesgos por responsabilidad profesional en los términos que se determinen reglamentariamente.
- d) Los requisitos específicos que puedan establecerse para cada actividad en la que hayan de ejercer sus funciones.
- e) Los requisitos adicionales que, en su caso, se determinen reglamentariamente.

Artículo 19 *septies*. Agentes habilitados.

1. La Administración del Principado de Asturias podrá habilitar, con carácter general o específico, a personas físicas o jurídicas para la realización de determinados trámites electrónicos en representación de los interesados o las interesadas. No obstante, quien sea interesado podrá siempre comparecer por sí mismo en el procedimiento.».

2. La habilitación se llevará a cabo a través de la suscripción del correspondiente convenio de colaboración, tramitado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la presente ley.

El convenio deberá recoger de forma específica los procedimientos y trámites objeto de la habilitación, y las condiciones y obligaciones aplicables a las personas físicas o jurídicas habilitadas.

La Consejería competente en materia de Administración pública y régimen jurídico aprobará un modelo normalizado de convenio en que se articule la habilitación.



3. El registro de apoderamientos contendrá una sección en la que se incorporarán los datos correspondientes a los agentes habilitados.

4. En la sede electrónica que corresponda se incorporará un inventario de procedimientos y trámites electrónicos que podrán realizarse con esta representación.».

Veinticuatro. Se modifican los apartados 4, 5 y 6 del artículo 21 y se introducen los apartados 7 y 8, quedando redactados como sigue:

«4. Las disposiciones de carácter general que aprueben quienes sean titulares de las Consejerías revestirán la forma de orden.

5. Las personas titulares de las Consejerías, las Viceconsejerías, las Secretarías Generales Técnicas, la Intervención General y las Direcciones Generales dictarán resoluciones, para la decisión de los asuntos de su competencia. También podrán dictar circulares, instrucciones y órdenes de servicio en materias propias de su competencia dirigidas a órganos jerárquicamente dependientes, en los términos establecidos en el artículo siguiente.

6. Los actos de otros órganos administrativos, en los supuestos a que se refiere el artículo 14.3 de la presente ley, adoptarán la forma de resolución.».

«7. Para que produzcan efectos jurídicos, los decretos y demás disposiciones administrativas de carácter general habrán de publicarse en el *Boletín Oficial del Principado de Asturias*, y entrarán en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Código Civil.

8. Las disposiciones reglamentarias se ordenarán conforme a la siguiente jerarquía:

1.º Decretos aprobados por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

2.º Órdenes acordadas por las Comisiones Delegadas del Consejo de Gobierno.

3.º Órdenes aprobadas por las personas titulares de las Consejerías.».

Veinticinco. Se introduce un artículo 21 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 21 bis. Circulares, instrucciones y órdenes de servicio.

1. Las personas titulares de las Consejerías, Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas, Intervención General y Direcciones Generales podrán impulsar y dirigir la actividad administrativa de los órganos dependientes, mediante circulares, instrucciones y órdenes de servicio.

2. Las circulares son directrices internas destinadas a los órganos y unidades que de ellos dependan, en las que se contienen criterios de aplicación o interpretación de una disposición, con el fin de asegurar una actuación homogénea.

3. Las instrucciones son directrices internas en las que se fijan o establecen pautas o formas de actuación por las que han de regirse los órganos o unidades dependientes.

4. Las órdenes de servicio son reglas de actuación u órdenes específicas que se dirigen a un órgano o unidad jerárquicamente inferior para un supuesto determinado.

5. Las circulares, instrucciones y órdenes de servicio serán publicadas en el *Boletín Oficial del Principado de Asturias* cuando una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la normativa sobre transparencia y acceso a la información pública.



6. El incumplimiento de las circulares, instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en que se pueda incurrir.».

Veintiséis. Se modifica el apartado 2 del artículo 22, que queda redactado como sigue:

«2. Las notificaciones a las personas interesadas de las resoluciones y actos que afecten a sus derechos e intereses y de los actos de trámite se realizarán de conformidad con lo establecido en la normativa básica de régimen jurídico o procedimiento administrativo.

Dichas notificaciones serán firmadas por la persona titular del servicio de la Consejería competente en la materia o por quien sea titular de la estructura administrativa responsable de la tramitación del procedimiento en que los actos o resoluciones se hayan producido.».

Veintisiete. Se suprime el apartado 4 del artículo 25, que queda sin contenido.

Veintiocho. Se modifica la letra d) del artículo 26 y se introducen las letras e), f) y g), siendo su redacción la siguiente:

«d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.».

«e) La resolución administrativa que ponga fin a los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.

f) La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora, a través de los que se determine la cuantía indemnizatoria de los daños y perjuicios causados por la conducta sancionada, cuando dicho importe no hubiera sido determinado en el procedimiento sancionador.

g) Los demás actos de órganos u autoridades cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.».

Veintinueve. Se incorpora el artículo 31 al capítulo V y se modifica su contenido, quedando redactado como sigue:

«Artículo 31. Principios de buena regulación.

En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, la Administración actuará de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios, en los términos regulados en la normativa básica de régimen jurídico o procedimiento administrativo.».

Treinta. Se introduce un artículo 31 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 31 bis. Planificación y evaluación normativa.

1. Al comienzo de la legislatura, el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo, aprobará un plan de iniciativas legislativas en el que se recogerán los proyectos legislativos cuya aprobación por el Consejo de Gobierno y posterior remisión a la Junta General del Principado de Asturias esté prevista durante la legislatura. Dicho plan incorporará una ficha explicativa de cada uno de los proyectos legislativos.

Además, dentro del último trimestre de cada año, la Administración del Principado de Asturias, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería



que hubiera sido nombrada vicepresidenta, o, en su defecto, de quien sea titular de la Consejería con competencias en materia de Administración pública y régimen jurídico, aprobará un plan normativo anual, que contendrá las iniciativas legales y reglamentarias que se prevean elevar para su aprobación en el año siguiente.

Si fuera preciso modificar los citados planes, dicha modificación podrá efectuarse por resolución de la persona titular de la Consejería que hubiera sido nombrada vicepresidenta, o, en su defecto, de quien sea titular de la Consejería con competencias en materia de Administración pública y régimen jurídico, debiendo darse cuenta de tales modificaciones al Consejo de Gobierno.

2. Los planes a que se refiere el apartado anterior, una vez aprobados, se publicarán en el portal de transparencia, al igual que las eventuales modificaciones de los mismos.

3. La Secretaría General Técnica de cada Consejería, dentro de los dos primeros meses del año, elaborará un informe de seguimiento de las disposiciones de su ámbito competencia contenidas tanto en el plan de iniciativas legislativas como en el plan normativo del año anterior. En dichos informes se recogerán y analizarán los aspectos relevantes de las disposiciones aprobadas en relación con la eficacia, eficiencia y sostenibilidad de la norma; respecto de las disposiciones no aprobadas, se indicará el estado de tramitación de las mismas y la previsión para su aprobación.

Los informes de seguimiento del plan de iniciativas legislativas y del plan normativo anual serán elevados por la persona titular de la Consejería que hubiera sido nombrada vicepresidenta o vicepresidente, o, en su defecto, por la titular de la Consejería con competencias en materia de Administración pública y régimen jurídico, para su aprobación por el Consejo de Gobierno, si procede.

4. Los informes de seguimiento a que se refiere el apartado anterior, así como la evaluación final del plan de iniciativas legislativas, serán objeto de publicación en el Portal de Transparencia de la Administración del Principado de Asturias.».

Treinta y uno. Se modifica el artículo 32, quedando redactado como sigue:

«Artículo 32. Iniciación.

1. El procedimiento para la elaboración de anteproyectos de ley y de disposiciones administrativas de carácter general se iniciará por resolución motivada de la persona titular de la Consejería que ostente la competencia en la materia respectiva, por iniciativa propia o a propuesta de los distintos órganos centrales de la misma.

2. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, y antes de iniciar el procedimiento de elaboración de la disposición, se sustanciará, por un plazo no inferior a siete días hábiles una consulta pública a través del Portal de Transparencia de la Administración, en la que se recabará la opinión de los ciudadanos y las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Podrá prescindirse de la consulta pública cuando se trate de normas presupuestarias u organizativas, concurran razones graves de interés público que lo justifiquen o la propuesta normativa no tenga impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a las personas destinatarias o regule aspectos parciales de una materia. También



podrá prescindirse de la consulta cuando la tramitación de la norma se realice a través del procedimiento de urgencia.

3. Deberá incorporarse preceptivamente al expediente una memoria de análisis de impacto normativo expresiva de la justificación, necesidad y oportunidad de la norma, la adecuación de la propuesta con los fines y objetivos que persigue y la incidencia que habrá de tener la disposición en el marco normativo en el que se inserte, un informe de valoración de la propuesta normativa, una tabla de vigencias de disposiciones anteriores sobre la misma materia y disposiciones que pudieran resultar afectadas las memorias de evaluación de impacto exigidas en la legislación sectorial, así como la evaluación *ex post* que incluirá la forma en la que se analizarán los resultados de la aplicación de la norma.

Con carácter potestativo, y, en todo caso, cuando una norma específica o sectorial lo exija, la memoria de análisis de impacto normativo incluirá también un estudio acreditativo de los costes y beneficios que la norma haya de representar, tanto directos como indirectos y tanto económicos como sociales.

Igualmente, si existieran, se incluirán en el expediente los estudios, consultas, informes previos y demás documentación que hubiera justificado la propuesta inicial.

4. Todo anteproyecto de ley o de disposición administrativa de carácter general deberá ir acompañado de una memoria económica en la que se pongan de manifiesto, detalladamente evaluados, cuantos datos resulten precisos para conocer las posibles repercusiones económicas y presupuestarias de su ejecución. Esta memoria se integrará en la memoria de análisis de impacto normativo.

5. La estructura y contenido del modelo de la memoria de análisis de impacto normativo a que se refiere el apartado 3 se aprobará por acuerdo del Consejo de Gobierno y se publicará en el *Boletín Oficial del Principado de Asturias*.».

Treinta y dos. Se modifica el artículo 33, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 33. Tramitación.

1. El órgano responsable de la tramitación de los respectivos procedimientos en cada Consejería será la Secretaría General Técnica.

2. Si la disposición afecta a los derechos e intereses legítimos de las personas, se publicará el texto en el portal de transparencia, por un plazo no inferior a diez días hábiles, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

Cuando una norma específica o sectorial así lo establezca o la persona titular de la Consejería competente, en atención a la naturaleza de la disposición lo considere conveniente, el anteproyecto de ley o proyecto de disposición se someterá a información pública durante el periodo que se determine.

Podrá prescindirse de los trámites de audiencia e información públicas, en el caso de normas presupuestarias u organizativas o si concurren razones graves de interés público que lo motiven.

Con anterioridad a la práctica de los trámites de audiencia o información públicas, el texto de las disposiciones deberá remitirse a los titulares de las demás Consejerías, para que si lo estiman pertinente puedan formular observaciones en el plazo de siete días naturales.



Junta General del Principado de Asturias

3. Cuando la disposición suponga o pueda suponer un incremento de gasto o disminución de ingresos, deberá ser informada preceptivamente, a efectos económicos y con carácter previo a su aprobación, por la Consejería competente en materia económica y presupuestaria.

En el caso de que la norma implicara la necesidad de incremento o dotación de medios personales, se incluirá una memoria sobre este extremo y será preceptivo informe de la Consejería competente en materia de empleo público.

4. Las propuestas de disposiciones generales serán informadas por la Secretaría General Técnica de la Consejería. Asimismo, por decisión de la persona titular de la Consejería competente podrán someterse a informe del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

5. Los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones se remitirán, antes de su aprobación por el órgano competente, a los titulares de las demás Consejerías, para que en el plazo de siete días naturales puedan formular las observaciones que estimen oportunas.

6. Cuando por razón de la importancia de la materia objeto de regulación o por aplicación de lo preceptuado en las disposiciones vigentes, sea preceptivo o, en su caso, se entienda conveniente, la disposición, será sometida a dictamen de los órganos consultivos correspondientes. Si fuera preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, conforme a su normativa reguladora, será el último en solicitarse.

7. Cumplimentados los trámites recogidos en este artículo, con la salvedad del trámite del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, la persona titular de la Consejería proponente de la disposición, mediante resolución, aprobará ésta como anteproyecto de ley o proyecto de decreto, según los casos, con carácter previo a la solicitud de dictamen al Consejo Consultivo, si fuera preceptivo, o de elevarlo al órgano competente para su aprobación. Tratándose de la elaboración de una orden, será la persona titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería correspondiente quien, mediante resolución, aprobará esta como proyecto de orden, para su posterior aprobación, si procede, por la persona titular de la Consejería.

8. En cualquier momento del procedimiento de elaboración de una norma, el Consejo de Gobierno o Comisión Delegada, a iniciativa propia o a instancia de quien sea titular de la Consejería proponente, si se trata de un anteproyecto de ley o proyecto de Decreto, o la persona titular de la Consejería, si se trata de un proyecto de orden, podrán mediante acuerdo o resolución, según los casos, declarar la urgencia en la tramitación cuando concurren razones de interés público o circunstancias extraordinarias que exijan la aprobación urgente de la norma, debiendo justificarse adecuadamente en el expediente las circunstancias que sirvieron de fundamento.

Declarada la urgencia, además de poder prescindirse de la consulta pública previa, podrá abreviarse u omitirse el trámite de observaciones a las Consejerías, todos los plazos de tramitación quedarán reducidos a la mitad de la duración establecida en esta u otra norma y la falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en plazo no impedirá la continuación del procedimiento, sin perjuicio de su eventual incorporación y consideración cuando se reciba. No obstante, en los casos en que fuera preceptiva la consulta al Consejo Consultivo del Principado de Asturias, no podrá ponerse fin al procedimiento de elaboración de la norma en tanto no haya sido emitido el correspondiente dictamen.».

Treinta y tres. Se modifica el artículo 34, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 34. Aprobación.

Los anteproyectos de ley o proyectos de disposición habrán de ser sometidos a aprobación por el órgano competente en cada caso.».



Treinta y cuatro. Se modifica el título del capítulo VI, siendo su redacción la siguiente:

«CAPÍTULO VI. De la potestad sancionadora y la responsabilidad patrimonial».

Treinta y cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 35, que queda redactado como sigue:

«2. La iniciación del procedimiento sancionador, cuando existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos, será dispuesta por quien ostente la competencia para resolver el procedimiento con imposición de la sanción correspondiente. En el mismo supuesto, si en un mismo procedimiento concurrieran varias infracciones y sanciones, la iniciación será dispuesta por quien ostente la competencia para resolver con imposición de la sanción por la infracción más grave.

En los restantes supuestos, podrá disponerse en cada Consejería por las personas titulares de las mismas o de las Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas o Direcciones Generales, en el ámbito de las funciones cuyo ejercicio les corresponda, sin perjuicio de lo que pueda establecer la normativa sectorial del Principado de Asturias.

Dichos órganos son, asimismo, competentes para ordenar la instrucción de informaciones previas, la designación de instructora o instructor y, en su caso, secretario o secretaria del procedimiento sancionador y para la adopción de medidas provisionales a fin de asegurar la resolución final que pueda recaer.».

Treinta y seis. Se introduce un artículo 35 ter, con la redacción siguiente:

«Artículo 35 ter. Reducciones en la cuantía de la sanción.

Sin perjuicio de lo establecido en la legislación básica, en aquellos casos en los que la sanción a imponer tenga únicamente carácter pecuniario, cuando, recibida la notificación de la resolución de inicio del procedimiento sancionador y en el trámite de alegaciones frente a la misma, la presunta infractora o el presunto infractor reconozca su responsabilidad sin ejercer acción ni aportar o proponer prueba alguna, se aplicará una reducción del 25 por ciento sobre el importe de la sanción propuesta. Asimismo, se aplicará una reducción del 25 por ciento acumulable a la anterior, sobre el importe de la sanción pecuniaria propuesta, cuando la persona interesada proceda al pago voluntario en cualquier momento de la tramitación del procedimiento anterior a la adopción de la resolución sancionadora. Ambos porcentajes de reducción se aplicarán en defecto de otros superiores que, para los mismos supuestos, puedan estar establecidos o establecerse en disposiciones legales o reglamentarias del Principado de Asturias.».

Treinta y siete. Se introduce un artículo 35 *quater*, con la siguiente redacción:

«Artículo 35 *quater*. Responsabilidad patrimonial.

1. Corresponde a las personas titulares de las Consejerías, en el ámbito de sus competencias, la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. No obstante, será precisa autorización del gasto por el Consejo de Gobierno cuando este sea competente por razón de su cuantía.

2. En el caso de los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración del Principado de Asturias, el órgano competente para la resolución de dichos procedimientos vendrá determinado por su normativa específica, y en su defecto, corresponderá a quien sea titular de la Consejería a la que estuviera vinculado o dependiese el organismo público o entidad de derecho público.».

Treinta y ocho. Se modifica el artículo 37, que queda redactado en los términos siguientes:



«Artículo 37. Órgano competente.

1. El presidente del Principado de Asturias y las personas titulares de las Consejerías, dentro de sus respectivas competencias, son los órganos de contratación de la Administración del Principado de Asturias y están facultados para otorgar, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma, los respectivos contratos en que ésta intervenga, previo el cumplimiento de las determinaciones que sean exigibles y sin perjuicio, en su caso, de la necesaria autorización del Consejo de Gobierno para la celebración de determinados contratos, de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente.

2. Corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales, los pliegos de prescripciones técnicas generales así como modelos de cláusulas de uso general y en particular sociales y medioambientales; y a los titulares de las Consejerías respectivas la aprobación de los proyectos técnicos, los pliegos de cláusulas administrativas particulares, así como modelos de pliegos particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga, y los pliegos de prescripciones técnicas que hayan de servir de base a cada contrato.

3. En los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración del Principado de Asturias, las competencias a que se refieren los apartados precedentes serán ejercidas de conformidad con las normas que los regulan.».

Treinta y nueve. Se suprime el apartado 2 del artículo 39, que queda sin contenido, y se introduce un artículo 39 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 39 bis. Contratación centralizada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en la estructura de la Consejería con competencias en materia de patrimonio, existirá un servicio, con el nivel orgánico que se determine, de contratación centralizada para la tramitación de los procedimientos de contratación relativos a prestaciones que afecten a la generalidad de las Consejerías. En este ámbito, el órgano de contratación será la persona titular de la Consejería referida y la Mesa de Contratación que asista a dicho órgano estará integrada por la Presidencia y una Vocalía designadas por el órgano de contratación, una letrada o un letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias y quien sea titular de la Intervención General del Principado de Asturias o persona en quien delegue. La persona titular de la Jefatura de Servicio que tenga encomendada la tramitación de la contratación o persona en quien delegue, actuará como secretario.».

Cuarenta. Se introduce un artículo 39 ter, con la siguiente redacción:

«Artículo 39 ter. Resolución de contratos.

1. Corresponde al órgano de contratación acordar la resolución de los contratos, aunque su celebración hubiera sido autorizada por el Consejo de Gobierno conforme a lo establecido en el artículo 38.

2. Los procedimientos de resolución contractual en el ámbito del Principado de Asturias se instruirán y resolverán en un plazo máximo de ocho meses a contar desde su inicio, ya sea de oficio o a instancia de parte.».

Cuarenta y uno. Se modifica el artículo 41, que queda redactado como sigue:

«Artículo 41. Registro de Contratos.

1. En la Consejería competente en materia de patrimonio se llevará un registro de los contratos que celebre la Administración de Principado de Asturias y las demás entidades que formen parte



del sector público autonómico, en el que se reflejarán los datos que permitan tener un exacto conocimiento de los mismos, así como de las modificaciones, ampliaciones de plazo, prórrogas, resoluciones y cuantas incidencias tengan lugar en su ejecución.

2. Los datos y documentación necesaria para la formación y actualización de los asientos registrales serán facilitados por las Consejerías y las demás entidades que formen parte del sector público autonómico en la forma que se determine reglamentariamente, procurando en todo caso la interconexión del registro de contratos con los sistemas informáticos de tramitación electrónica de forma que se cumpla el principio de «una sola vez».

3. El registro de contratos, en cuanto sistema oficial central de información sobre la contratación de la Administración del Principado de Asturias y de las entidades integrantes del sector público autonómico, facilitará cuanta información sea requerida por los órganos de control internos y externos, así como al Registro de Contratos del Sector Público y a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.».

Cuarenta y dos. Se modifica la disposición adicional tercera, que queda redactada como sigue:

«Tercera. Competencia sancionadora en las infracciones leves.

Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones sectoriales del Principado de Asturias, se atribuye a las personas titulares de las Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales, en el ámbito de las funciones que respectivamente les correspondan, la competencia para la resolución de los procedimientos sancionadores por la comisión de infracciones que se califiquen como leves.».

Cuarenta y tres. Las disposiciones adicionales cuarta y quinta pasan a numerarse, respectivamente, como quinta y sexta, y se introduce una nueva disposición adicional cuarta, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional cuarta. Inicio de procedimientos sancionadores sectoriales.

La normativa sectorial del Principado de Asturias sobre el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador deberá aplicarse, en su caso, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo primero del artículo 35.2 de esta ley.».

Cuarenta y cuatro. Se introduce una disposición adicional séptima, con la siguiente redacción:

«Séptima. Equivalencias orgánicas.

Todas las referencias que el texto de esta ley realiza a la Consejería de Interior y Administraciones Públicas se entenderán realizadas a la Consejería con competencias en materia de Administración pública y régimen jurídico, y las que realiza a la Consejería de Hacienda, Economía y Planificación, a la Consejería con competencias en materia de patrimonio.

Las referencias a Dirección Regional, en singular o en plural, se entenderán realizadas a Dirección General o Direcciones Generales, respectivamente.

Asimismo, cuando el texto de esta ley se refiere a legislación básica de régimen jurídico de las Administraciones públicas, se entenderá que lo hace a legislación básica de régimen jurídico o procedimiento administrativo común.».

Cuarenta y cinco. Se añade una disposición adicional octava:

«Disposición adicional octava. Suplencia en organismos públicos y entes.



En el ámbito de los organismos públicos y entes vinculados o dependientes de la Administración del Principado de Asturias, la designación de suplentes de los titulares de sus órganos de gobierno y gestión se regirá por lo dispuesto en su normativa reguladora, y, en su defecto, supletoriamente por lo dispuesto en el artículo 19 bis de esta ley para la suplencia de los órganos superiores de la Administración del Principado de Asturias.».

Cuarenta y seis. Se añade una disposición adicional novena:

«Disposición adicional novena. Resolución de contratos en el ámbito de las entidades locales del Principado de Asturias.

En los procedimientos de resolución contractual, lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 39 ter de esta ley será aplicable a las entidades locales de la Comunidad Autónoma.».

Cuarenta y siete. Se añade una disposición adicional décima:

«Disposición adicional décima. Especialidades por razón de la materia.

Las siguientes actuaciones y procedimientos se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en esta ley:

a) Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria, así como su revisión en vía administrativa.

b) Las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria.».

TÍTULO II

Medidas legales de simplificación administrativa en ámbitos sectoriales

CAPÍTULO I

Medidas en materia de carreteras

Artículo 2. *Modificación de la Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras.*

La Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 13, que queda redactado como sigue:

«Artículo 13. Aprobación de estudios y proyectos.

1. Los estudios y proyectos de carreteras que deban someterse al trámite de información pública serán objeto de aprobación provisional y aprobación definitiva. Los estudios y proyectos que no hayan de someterse a información pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de esta ley, serán objeto únicamente de aprobación definitiva.

2. La aprobación provisional permitirá practicar, en su caso, la información pública y la oficial correspondiente, así como cuantos otros trámites sean preceptivos o convenientes para obtener la aprobación definitiva.

3. La aprobación provisional y la definitiva de los estudios y proyectos de carreteras autonómicas corresponde al consejero competente en materia de carreteras.

4. La aprobación definitiva de un estudio o proyecto de carreteras podrá confirmar o modificar los términos de la aprobación provisional.

5. La aprobación definitiva implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación a que se refiere el artículo 16 de esta ley.



6. Será de aplicación lo previsto en los apartados anteriores a las modificaciones de un proyecto de construcción.

7. La redacción y aprobación de estudios y proyectos de carreteras de las redes municipales corresponde a los Ayuntamientos respectivos.».

Dos. Se modifica el artículo 16, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 16. Declaración de utilidad pública.

1. La aprobación de los proyectos de carreteras implica la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición y modificación de servidumbres. Asimismo, implica las limitaciones a la propiedad establecidas en esta ley.

2. La declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación se referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obras, así como, en su caso, en los proyectos de obras complementarias que puedan aprobarse posteriormente, con efectos desde la fecha en que estas aprobaciones se produzcan.

3. A los efectos indicados en los apartados anteriores, los proyectos de carreteras y sus modificaciones deberán comprender la definición del trazado de las mismas y la determinación de los terrenos, construcciones u otros bienes o derechos que se estime preciso ocupar o adquirir para la construcción, defensa o servicio de aquellas y la seguridad de la circulación, así como las modificaciones de los servicios afectados.».

Tres. Se modifica el apartado 4 del artículo 24, que queda redactado como sigue:

«4. Dentro de las zonas de protección de las carreteras de la Red del Principado de Asturias, cualquier tipo de obras o actuaciones que modifiquen el estado de las edificaciones, instalaciones o terrenos requerirán la autorización previa de la Consejería competente en materia de carreteras, salvo en los casos expresados en los artículos 49 bis, 53 y 54 de esta ley, relativos al régimen de declaración responsable y a los tramos urbanos de carreteras.».

Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 27, que queda con la siguiente redacción:

«2. En la zona de servidumbre no podrán realizarse edificaciones ni otras obras sobre posibles edificios existentes, salvo las de mera conservación para mantener su destino y utilización actual u otro que sea compatible con el planeamiento urbanístico, exceptuándose los casos previstos en los artículos 29 y 46 de esta ley, ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial o el destino de la carretera, previa autorización de la Consejería competente en materia de carreteras o, en su caso, previa declaración responsable de la persona interesada en los términos del artículo 49 bis, sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el artículo 41 de esta ley sobre condiciones para el otorgamiento de autorizaciones.».

Cinco. Se modifica el artículo 28, quedando redactado de la siguiente manera:

«Artículo 28. Zona de afección.

1. La zona de afección de una carretera consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre definida en el artículo 27 y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de cien metros en autopistas y autovías, de cincuenta metros en corredores, de treinta metros en el resto de las carreteras regionales y en las comarcales y de veinte metros en las locales, medidas desde las citadas aristas.



2. En la zona de afección la ejecución o el cambio de uso o destino de obras e instalaciones, fijas o provisionales, requerirán la autorización de la Consejería competente en materia de carreteras o, en su caso, de declaración responsable de la persona interesada en los términos del artículo 49 bis, sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el artículo 41 de esta ley sobre condiciones para el otorgamiento de autorizaciones.

3. Las actuaciones de naturaleza constructiva requerirán de autorización previa de la Consejería competente en materia de carreteras. Su denegación habrá de ser motivada y sólo podrá fundarse en las previsiones de los planes y proyectos de ampliación o variación de la carretera en un plazo no superior a diez años, transcurridos los cuales sin haberse realizado las previsiones que motivaron la denegación, ante una nueva solicitud no se podrá denegar por la misma razón.

4. No se podrán ejecutar, sin embargo, en la zona de afección construcciones salvo que queden totalmente fuera de la línea límite de edificación, conforme a lo que se establece en el artículo siguiente, sin perjuicio de lo dispuesto para las obras de mera conservación en el artículo anterior.».

Seis. Se modifica el apartado 6 del artículo 29, que queda redactado de la siguiente forma:

«6. Se podrán ejecutar obras de conservación y mantenimiento de las construcciones existentes dentro de la línea límite de edificación, así como obras de reparación por razones de higiene y ornato de los inmuebles, previa autorización de la Consejería competente en materia de carreteras o, en su caso, previa declaración responsable de la persona interesada en los términos del artículo 49 bis.».

Siete. Se modifica el título del capítulo VI, quedando como sigue:

«CAPÍTULO VI. Control de actuaciones en zonas de protección de las carreteras fuera de tramos urbanos: autorizaciones y declaraciones responsables».

Ocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 42, el cual queda redactado como sigue:

«2. En las zonas de servidumbre serán autorizables:

a) Los movimientos de tierras y explanaciones de finalidad y volumen superior al propio de actividades agrícolas, siempre que no sean perjudiciales para la estabilidad de la carretera o su explotación, por modificación del curso de las aguas, reducción de la visibilidad o cualquier otro motivo.

b) El depósito provisional o permanente de materiales o maquinaria, cuando no influya negativamente en la seguridad vial.

c) Los cultivos de cualquier naturaleza siempre que no reduzcan la visibilidad en la carretera.

d) La plantación de árboles siempre que no reduzcan la visibilidad en la carretera, así como la poda o tala de arbolado.».

Nueve. Se introduce un nuevo artículo 49 bis, con el siguiente contenido:

«Artículo 49 bis. Declaración responsable.

1. Está sujeta a declaración responsable de la persona interesada la reparación de averías en las instalaciones de abastecimiento y saneamiento de agua sin ocupar la plataforma viaria.

2. En terrenos de propiedad privada situados en las zonas de servidumbre o afección están sujetos a declaración responsable de la persona interesada los siguientes usos y actuaciones, que



serán considerados trabajos de mantenimiento, mera conservación, higiene o reforma interior siempre que no produzcan cambio de uso ni incremento de volumen edificado por encima o por debajo de la rasante, ni afecten a la estructura o a la cimentación:

- a) Reparación y sustitución de tejados, sin aumento de volumetría.
- b) Reparación y cambio de puertas, ventanas, carpintería, con exclusión de portones de acceso.
- c) Pintado e impermeabilización de fachadas.
- d) Obras interiores que no impliquen cambio de uso o destino del inmueble.

No procederá la declaración responsable para las citadas actuaciones de mantenimiento, mera conservación, higiene o reforma interior cuando conlleven la ocupación de la zona de dominio público con materiales, maquinaria, instalaciones o elementos auxiliares. En estos casos será necesaria la autorización previa.

3. En la zona de afección de la carretera estarán sujetas a declaración responsable de la persona interesada la colocación de instalaciones desmontables, cierres, realización de talas y, en general, aquellas actuaciones de naturaleza no constructiva ni que impliquen aumento de volumetría, siempre que no conlleven la apertura de nuevos accesos a la carretera.

4. La declaración responsable deberá dirigirse a la Administración titular de la carretera y en ella la persona interesada declarará, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento del derecho o facultad, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento. Los requisitos mencionados deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable.

5. La declaración responsable irá acompañada de la documentación gráfica necesaria para la correcta localización y definición de la actuación que se pretende realizar y su relación con la carretera.

6. La declaración responsable deberá presentarse, según el modelo normalizado que apruebe la Administración titular de la carretera, con una antelación mínima de quince días al inicio de las obras, salvo en el supuesto al que se refiere el apartado 1 del presente artículo, en el que la declaración podrá presentarse en un plazo inferior pero siempre con carácter previo a acometer la actuación. La actuación deberá ejecutarse en el plazo máximo de un año desde la presentación de la declaración.

7. El seguimiento y comprobación de las actuaciones objeto de la declaración responsable será llevada cabo por el personal de inspección y vigilancia de la Administración titular de la carretera, que a tal efecto podrá dirigir al declarante instrucciones de obligado cumplimiento para mejor observancia de la ley y en garantía de la seguridad vial.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a la declaración responsable, o la no presentación ante la administración titular de la carretera de la declaración responsable o de la documentación que sea, en su caso, requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con la ejecución de la actuación desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.

8. Con carácter previo a la presentación de la declaración responsable los interesados o las interesadas podrán consultar a la Consejería competente en materia de carreteras y obtener información y orientación acerca de las condiciones técnicas y jurídicas que esta ley imponga a las actuaciones que se propongan realizar.



9. La presentación de la declaración responsable devengará la tasa correspondiente según su normativa reguladora, siendo su abono requisito previo imprescindible para que la presentación de la declaración responsable produzca efectos.».

Diez. Se modifica la letra a) del apartado 4 del artículo 56, la cual queda redactada de la siguiente manera:

«a) La realización de obras, instalaciones o actuaciones no permitidas en las zonas de dominio público, servidumbre o afección de la carretera, llevadas a cabo sin las autorizaciones requeridas o, en su caso, declaraciones responsables, o el incumplimiento de alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas o las especificadas en la declaración responsable procedente, cuando no fuera posible su legalización posterior.».

Once. Se modifica la letra a) del apartado 5 del artículo 56, la cual queda redactada de la siguiente forma:

«a) La realización de obras, instalaciones o actuaciones en las zonas de dominio público, servidumbre o afección de la carretera, llevadas a cabo sin las autorizaciones requeridas o sin la previa declaración responsable en los casos en que proceda o el incumplimiento de alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas o de las especificadas en la declaración responsable procedente, cuando puedan ser objeto de legalización posterior.».

Doce. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 57, quedando redactada de la siguiente manera:

«a) En el supuesto de incumplimiento de las condiciones de una concesión o autorización administrativa, o de las prescripciones especificadas en la declaración responsable procedente, el titular de esta o el declarante, respectivamente.».

Trece. Se modifica el apartado 1 del artículo 59, que queda redactado como sigue:

«1. La Consejería competente en materia de carreteras podrá, como medida cautelar, ordenar la paralización de las obras y la supresión de los usos y actividades no autorizados o que no se ajusten a las condiciones establecidas en la autorización, así como, en su caso, las no recogidas en declaración responsable o que no se ajusten a lo declarado, cuando afecten a carreteras autonómicas. Para asegurar la efectividad de esta medida, se podrá acordar el precinto de las instalaciones y la retirada de los materiales y la maquinaria que se utilicen en las obras.».

Catorce. Se modifica el apartado 2 del artículo 64, que queda redactado de la siguiente forma:

«2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiere cometido.

En el caso de infracciones de tracto continuo comenzará a contarse desde el momento en que hubieren concluido los actos constitutivos de la misma o hubieran sido autorizados o hubiera sido presentada la declaración responsable procedente.».

Quince. Se modifican los apartados 1 y 5 del artículo 65, los cuales quedan redactados de la siguiente forma:

«1. La imposición de sanciones por infracciones leves corresponderá la persona titular de la Dirección General con la competencia en materia de carreteras.».

«5. En las carreteras de titularidad municipal, la iniciación y tramitación del procedimiento sancionador y la imposición de sanciones y la adopción de las medidas necesarias en el caso de



usos y actividades no autorizadas o, en su caso, objeto de declaración responsable, o que no se ajusten a las condiciones de la autorización o a las prescripciones especificadas en la declaración responsable procedente, corresponde a los órganos municipales competentes, con arreglo a lo establecido en esta ley y conforme a la legislación sobre régimen local.».

CAPÍTULO II Medidas en materia de montes

Artículo 3. *Modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal.*

La Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 41, que queda redactado como sigue:

«Artículo 41. Régimen de aprovechamientos maderables y leñosos.

1. En los montes no gestionados por la Consejería competente en materia forestal, los aprovechamientos maderables y leñosos se realizarán de conformidad con los siguientes requisitos:

a) Cuando exista proyecto de ordenación, plan dasocrático o instrumento de gestión equivalente, o el monte esté incluido en el ámbito de aplicación de un plan de ordenación de los recursos forestales y este así lo prevea, el titular de la explotación del monte deberá remitir declaración responsable del aprovechamiento a la Consejería competente en materia forestal, al objeto de que por la misma se compruebe su conformidad con lo previsto en dicho instrumento de gestión o, en su caso, de planificación.

b) En el caso de que no esté aprobado el instrumento de ordenación del monte, el titular que pretenda efectuar un aprovechamiento maderable o leñoso solicitará autorización previa de la Consejería competente en materia forestal, la cual resolverá motivadamente dentro de los quince días siguientes al de entrada de la solicitud, que se entenderá estimada si no se dicta resolución expresa en el referido plazo; salvo que se trate de aprovechamientos maderables o leñosos a turno corto o domésticos de menor cuantía, en cuyo caso deberá comunicar, mediante una nueva declaración responsable, que concurren las circunstancias por las que no es necesaria dicha autorización, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo.

c) Se consideran aprovechamientos domésticos de menor cuantía aquellos que no tengan finalidad comercial y se destinen a uso doméstico, que no podrán, en ningún caso, superar los 10 m³ de madera o 20 estéreos de leñas anuales por propietario. Se consideran aprovechamientos de turno corto aquellos cuyo turno sea inferior a 20 años, en particular los realizados sobre las especies de los géneros *Populus* y *Eucalyptus*, además de aquellas especies y turnos conjuntamente tratados que se determine reglamentariamente.

2. La declaración responsable de que no concurren las circunstancias que hacen precisa una autorización administrativa previa se realizará con arreglo al procedimiento y modelo que se establezcan por orden del titular de la Consejería competente en materia forestal. En dicha declaración se incluirán, como mínimo, el número de árboles, especie y volumen o peso aproximado objeto del aprovechamiento.

La presentación de la declaración responsable habilita para la realización del aprovechamiento que fuera objeto de la misma, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas la Consejería competente en materia forestal y demás órganos y organismos públicos competentes.



3. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable, la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o la no presentación de la documentación que sea requerida en su caso para acreditar el cumplimiento de lo declarado determinarán la imposibilidad de continuar con el aprovechamiento desde el momento en que se tuviera constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiese lugar. Asimismo, la resolución que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al comienzo de la actividad, así como la imposibilidad de instar nuevos procedimientos para la realización de aprovechamientos madereros y leñosos en montes de gestión privada mediante declaración responsable durante un periodo de un año.

4. La persona titular de un aprovechamiento maderable o leñoso cuyos productos sean objeto de comercialización deberá comunicar la cuantía realmente obtenida al órgano forestal en el plazo máximo de un mes desde su finalización, con arreglo al procedimiento y modelo que se establezcan por orden del titular de la Consejería competente en materia forestal.

5. Siempre que el aprovechamiento esté sometido sólo a notificación o declaración responsable y dicha actividad esté sometida obligatoriamente a evaluación ambiental por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, o por la legislación de evaluación ambiental del Principado de Asturias, se estará a lo ordenado en el artículo 9.2 de aquella ley y demás preceptos de concordante aplicación.

6. Será necesaria autorización previa en aquellos montes cuyo aprovechamiento pueda afectar a espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000 o a bienes del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias. En estos casos la autorización administrativa será única, comprendiendo su otorgamiento a la Consejería competente en materia forestal, la cual recabará los informes o autorizaciones necesarias de los órganos sectoriales competentes del Principado de Asturias integrándolos en la autorización de corta, en la que se recogerán de forma expresa las condiciones por ellos impuestas, en su caso. La Consejería competente en materia forestal resolverá de forma motivada dentro del plazo de dos meses desde el registro de la solicitud. Transcurrido este plazo sin haberse notificado la resolución se entenderá estimada la solicitud, salvo en los supuestos en que la legislación básica o sectorial aplicable establezca de forma expresa lo contrario.

7. La Consejería competente en materia forestal comunicará a los Ayuntamientos las autorizaciones concedidas y las declaraciones responsables presentadas de aprovechamientos maderables y leñosos y sus condiciones.

8. El plazo máximo para la realización de un aprovechamiento será de 12 meses, a contar desde la fecha de notificación de la autorización o, en su caso, de presentación de la declaración responsable.

9. Las cortas a hecho llevarán aparejada la obligación del propietario del suelo de recuperar el arbolado del terreno deforestado en los términos que reglamentariamente se determinen.».

Dos. Se modifican la letra d) del apartado 1 y la letra k) del apartado 2 del artículo 90, Infracciones muy graves, que quedan redactadas como sigue:

«d) La corta, tala, desenraizamiento o venta de madera quemada procedente de incendio forestal, realizadas sin autorización o declaración responsable o fuera de la época hábil, así como la inutilización de especies forestales arbóreas o arbustivas, realizadas en terrenos de propiedad de particulares y cuando la cuantía de lo aprovechado sea igual o superior a mil quinientos metros cúbicos en especies de crecimiento rápido o de quinientos metros cúbicos en el caso de las de crecimiento lento. En el supuesto de que se trate de montes incluidos en el



Catálogo de Montes de Utilidad Pública, las conductas a que se refiere el párrafo anterior tendrán la consideración de infracciones muy graves cuando la cuantía de lo aprovechado sea igual o superior a quinientos metros cúbicos, con independencia de que se trate de especies de crecimiento rápido o lento.».

«k) La realización de aprovechamientos forestales sin autorización administrativa o, en su caso, declaración responsable y, en general, la realización de cualquier actividad no autorizada o notificada, cuando tales requisitos sean obligatorios.».

Tres. Se modifican la letra d) del apartado 1 y la letra k) del apartado 2 del artículo 91, Infracciones graves, que quedan redactadas como sigue:

«d) La corta, tala, desenraizamiento o venta de madera quemada procedente de incendio forestal, realizados sin autorización o declaración responsable o fuera del período hábil, así como la inutilización de especies forestales, arbóreas o arbustivas, realizadas en propiedades particulares y cuando el volumen de los productos forestales afectados sea igual o superior a quinientos metros cúbicos en especies de crecimiento rápido y cien metros cúbicos en especies de crecimiento lento, y no exceda de mil quinientos metros cúbicos en especies de crecimiento rápido y de quinientos metros cúbicos en especies de crecimiento lento. En montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, las conductas a que se refiere el apartado anterior, cuando afecten a productos forestales cuyo volumen sea igual o superior a cien metros cúbicos y no exceda de quinientos metros cúbicos, con independencia de que se trate de especies de crecimiento rápido o lento.».

«k) La realización de aprovechamientos forestales sin autorización administrativa o, en su caso, declaración responsable y, en general, la realización de cualquier actividad no autorizada o notificada, cuando tales requisitos sean obligatorios.».

Cuatro. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 92, Infracciones leves, que queda redactada como sigue:

«b) La corta, tala, desenraizamiento o venta de madera quemada procedente de incendio forestal, realizados sin autorización o declaración responsable o fuera del período hábil, así como la inutilización de especies forestales, arbóreas o arbustivas, realizadas en propiedad de particulares, cuando el volumen de los productos forestales aprovechados sea inferior a quinientos metros cúbicos tratándose de especies de crecimiento rápido y en el caso de especies de crecimiento lento el volumen de productos afectados sea inferior a cien metros cúbicos. En montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, las conductas a que se refiere el apartado anterior, cuando afecten a productos forestales cuyo volumen sea inferior a cien metros cúbicos, con independencia de que se trate de especies de crecimiento rápido o lento.».

CAPÍTULO III Medidas en materia de patrimonio

Artículo 4. *Modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio.*

La Ley del Principado de Asturias 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se añade un nuevo artículo 26 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 26 bis. Cesiones administrativas.



Junta General del Principado de Asturias

1. El Principado de Asturias podrá adquirir la propiedad o el uso de bienes y derechos por título de cesión gratuita de otras Administraciones públicas, organismos o entidades vinculadas o dependientes de aquéllas, para destinarlos a un uso o servicio público de su competencia.

2. Para su validez, la cesión de bienes y derechos deberá aceptarse por acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de patrimonio, previo informe, en su caso, de la Consejería u organismo al que hayan de adscribirse los bienes o derechos objeto de cesión.

Cuando la adquisición lleve aparejadas cargas o gravámenes más allá del cumplimiento del destino establecido, se requerirá previo informe de tasación pericial y de la Intervención General del Principado de Asturias.

3. Las cesiones gratuitas de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos se formalizarán en documento administrativo que será título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad, en los términos previstos en la legislación patrimonial estatal.».

Dos. Se añade un nuevo artículo 92 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 92 bis. Autorizaciones especiales de uso sobre bienes afectados al servicio público.

La persona titular de la Consejería que tuviese afectado un bien podrá conceder autorizaciones de uso por plazo inferior a 30 días, o para la organización de conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos. En el acto de autorización deberán determinarse tanto las condiciones de utilización del inmueble, estableciendo lo necesario para que la misma no interfiera su uso por los órganos administrativos que lo tengan afectado o adscrito, como la contraprestación a satisfacer por el solicitante de acuerdo con lo establecido en esta ley.».

CAPÍTULO IV

Medidas en materia de patrimonio cultural

Artículo 5. *Modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.*

La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 35, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 35. Impacto ambiental.

Todos los planes y programas, así como los proyectos de obras, instalaciones y actividades que hayan de someterse a procedimientos de evaluación ambiental, habrán de contener en la documentación que corresponda un apartado específico sobre la afección que puedan producir en los bienes integrantes del patrimonio cultural, que requerirá de informe favorable de la Consejería competente en materia de patrimonio cultural. Dicho apartado identificará todos los bienes afectados, con su régimen jurídico de protección, los posibles impactos y su valoración, así como la propuesta de medidas correctoras.».

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 63, que queda redactado de la siguiente forma:

«2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, y en general en esta ley, tendrán la consideración de actividades arqueológicas los estudios de arte rupestre, exploraciones, prospecciones, excavaciones, seguimientos, sondeos, controles y cualesquiera otras que, con remoción de terreno o sin ella, tengan por finalidad descubrir, documentar, investigar o proteger bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico e impliquen su manejo directo o la intervención sobre ellos o en su entorno; todo ello, sin perjuicio de la regulación mediante una



normativa específica de las actividades relativas a los bienes a que hace referencia el apartado 2 del artículo 61.

Tiene, asimismo, la consideración de actividad arqueológica el empleo de detectores de metales o instrumentos similares de detección de restos culturales. El empleo de estos instrumentos deberá ser autorizado previamente por la Consejería competente en materia de patrimonio cultural, conforme a lo que se disponga reglamentariamente. Los objetos y restos materiales hallados con la utilización de estos dispositivos que posean los valores que son propios del patrimonio arqueológico o paleontológico quedan sujetos a lo dispuesto en el artículo 62 de esta ley y en ningún supuesto se entenderán hallados por azar.».

Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 75, que queda redactado de la siguiente forma:

«3. El uso de los hórreos, paneras y cabazos declarados Bien de Interés Cultural, incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias o en un Catálogo Urbanístico con protección integral, será el tradicional de granero, despensa y almacenaje de enseres y herramientas.

En el caso de hórreos, paneras y cabazos incluidos en un Catálogo Urbanístico con nivel de protección parcial o inferior, se podrán llevar a cabo, previa autorización administrativa, otros usos que reglamentariamente se detallen, siempre que en las intervenciones de adaptación al nuevo uso se respeten las características básicas de este bien etnográfico.».

CAPÍTULO V

Medidas en materia de subvenciones

Artículo 6. *Modificación del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.*

Se introducen los artículos 67 ter a 67 octies en el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, con la siguiente redacción:

«Artículo 67 ter. Planificación estratégica.

1. Cada Consejería elaborará una planificación estratégica de las subvenciones que tengan previsto conceder la misma y sus organismos, entidades o entes dependientes o vinculados.

No obstante, se podrán elaborar planes estratégicos especiales para un organismo, entidad o ente público cuando su importancia justifique su desarrollo particularizado; así como planes estratégicos conjuntos cuando existan objetivos compartidos y líneas de subvención que puedan ser gestionadas por varias Consejerías, organismos, entes o entidades públicos.

2. La planificación deberá ser coherente con los documentos de planificación y objetivos que se elaboren cada año en el marco del proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

3. Los planes estratégicos tienen carácter programático, y su contenido no crea derechos ni deberes. La efectividad de los planes queda condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvenciones y a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.

4. Los planes estratégicos tendrán un periodo de vigencia de dos años.

5. Los planes estratégicos, así como los planes estratégicos especiales serán aprobados por el titular de la Consejería competente, salvo los planes conjuntos que serán aprobados por el Consejo de Gobierno.

6. Cuando se tramite una subvención que no esté comprendida en la planificación estratégica de la Consejería correspondiente, se deberá modificar el plan, previa elaboración de una



memoria en la que se detallen la relación de los objetivos de la subvención con la planificación estratégica y los posibles efectos en ésta.

7. Cada plan contendrá la totalidad de las líneas de subvenciones que tenga previsto conceder la Consejería afectada y todos los organismos y entidades dependientes o vinculadas a ella e incluirá como mínimo:

a) Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir con las líneas de subvenciones. Estos objetivos se adaptarán a la estructura que marque la normativa reguladora de la elaboración de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, así como aquellos que puedan corresponder a las personas beneficiarias de las subvenciones.

b) El plazo necesario para su consecución.

c) La financiación necesaria, con indicación, en su caso, de las aportaciones de las distintas administraciones públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados que participen en estas acciones de fomento.

d) Los indicadores que permitan realizar un seguimiento sobre el cumplimiento de los objetivos, y las actuaciones de seguimiento que se vayan a realizar y que deberán tener en cuenta, en todo caso, los indicadores y objetivos relativos al impacto de género.

2. Cada Consejería emitirá en el primer trimestre de cada año un informe sobre el grado de ejecución del plan que será remitido a la Intervención General del Principado de Asturias a efectos de garantizar el control financiero de los planes.

3. Los planes y programas relativos a políticas sectoriales que estén previstos en normas legales o reglamentarias tendrán la consideración de planes estratégicos de subvenciones de los regulados en esta ley, siempre que recojan el contenido previsto en el apartado 7 de este artículo.

Artículo 67 *quater*. Procedimiento de concesión.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que tiene carácter básico, el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. Tendrá la consideración de concurrencia mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

En este supuesto, la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través del órgano instructor. La composición del órgano colegiado será la que establezcan las correspondientes bases reguladoras.

Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el órgano competente procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones.

2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales aquella en que al menos su dotación presupuestaria, finalidad y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en la



Junta General del Principado de Asturias

correspondiente resolución de concesión o convenio de colaboración, que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

3. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria.

Artículo 67 *quinques*. Procedimiento simplificado.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las bases reguladoras podrán establecer un procedimiento simplificado de concurrencia competitiva, en los siguientes supuestos:

a) Cuando el objeto y finalidad de la ayuda justifiquen que la prelación de las solicitudes, válidamente presentadas y que cumplan los requisitos que se establezcan, se fije únicamente en función de su fecha de presentación, dentro de un plazo limitado, con el fin de adjudicar las subvenciones dentro del crédito disponible. Dicha justificación deberá quedar debidamente motivada en el procedimiento de aprobación de las bases reguladoras.

b) Cuando las bases reguladoras prevean que la subvención se concederá a todos los que reúnan los requisitos para su otorgamiento y solo se aplicarán criterios de evaluación para cuantificar, dentro del crédito consignado en la convocatoria, el importe de dicha subvención.

c) Cuando el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente para atender a todas las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos, una vez finalizado el plazo de presentación, no siendo necesario establecer una prelación entre las mismas.

En los supuestos a) y b) las solicitudes de ayuda se podrán resolver individualmente. En el supuesto a) las solicitudes de ayudas se podrán resolver individualmente y la convocatoria podrá realizarse como convocatoria abierta, de acuerdo con el artículo siguiente de esta norma.

2. En los casos en que se aplique el procedimiento simplificado previsto en las letras a) y c) del apartado anterior y no sea preciso acudir a criterios para seleccionar ni para cuantificar la subvención a conceder o cuando dichos criterios sean totalmente automáticos, la propuesta de concesión se formulará por el órgano instructor, sin necesidad de intervención de órgano colegiado.

Artículo 67 *sexies*. Convocatoria abierta.

Excepcionalmente, cuando por la naturaleza o características de la subvención así resulte necesario, podrá utilizarse el régimen de convocatoria pública abierta, en virtud del cual las subvenciones podrán irse concediendo conforme se vayan solicitando por las personas interesadas con base en los requisitos o criterios establecidos en las bases reguladoras, siempre que exista crédito presupuestario.

Artículo 67 *septies*. Tramitación anticipada.

1. La convocatoria podrá aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquel en el que vaya a tener lugar la resolución de la misma, siempre que la ejecución del gasto se inicie en la



Junta General del Principado de Asturias

misma anualidad en que se produce la concesión y se cumpla alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Que exista normalmente crédito adecuado y suficiente para la cobertura presupuestaria del gasto de que se trate en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias.
- b) Que exista crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de Presupuestos Generales del Principado de Asturias que haya sido sometido a la aprobación de la Junta General del Principado correspondiente al ejercicio siguiente, en el cual se adquirirá el compromiso de gasto como consecuencia de la aprobación de la resolución de concesión.

2. En estos casos, la cuantía total máxima que figure en la convocatoria tendrá carácter estimado, por lo que deberá hacerse constar expresamente en la misma que la concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión. En los supuestos en los que el crédito presupuestario que resulte aprobado en la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias fuera superior a la cuantía inicialmente estimada, el órgano gestor podrá decidir su aplicación o no a la convocatoria, previa tramitación del correspondiente expediente de gasto antes de la resolución, sin necesidad de nueva convocatoria.

3. En el expediente de gasto que se tramite con carácter previo a la convocatoria, el certificado de existencia de crédito será sustituido por una diligencia expedido por la Intervención General del Principado en el que se haga constar que concurre alguna de las circunstancias mencionadas en el apartado 1 de este artículo.

4. Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el expediente de gasto se entenderán condicionados a que, al dictarse la resolución de concesión, subsistan las mismas circunstancias de hecho y de derecho existentes en el momento en que fueron producidos dichos actos.

Artículo 67 *octies*. Tramitación urgente.

1. La tramitación urgente de procedimientos de subvención se regirá por las siguientes reglas:

a) La declaración de urgencia, adoptada por el titular de la Consejería competente por razón de la materia, que tendrá carácter excepcional cuando la Administración deba actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos o de situaciones sobrevenidas que supongan grave peligro o graves daños para los intereses generales o el tejido empresarial. Podrá realizarse para procedimientos concretos, por ámbitos materiales específicos de la acción pública o en relación con las actuaciones necesarias de acuerdo con los acontecimientos o situación que justifiquen la urgencia.

b) Las nuevas líneas de subvenciones podrán tramitarse en todo caso en un expediente único que incluya las modificaciones precisas del plan estratégico, la elaboración de las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas.

c) Excepcionalmente, el Consejo de Gobierno podrá acordar, a propuesta motivada de la titular de la Consejería competente en materia de hacienda y previo informe de la Intervención General del Principado de Asturias, la aplicación respecto de determinados actos o áreas de gestión sujetos a esta forma de tramitación, del control financiero regulado en el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, en sustitución de la función interventora. El acuerdo adoptado se comunicará a las Intervenciones Delegadas y a los órganos gestores afectados por ellas y mantendrá sus efectos por el plazo estrictamente indispensable expresamente establecido en función de los acontecimientos o situaciones sobrevenidas que hayan determinado la urgencia.



2. El plazo para evacuar los informes preceptivos en estos procedimientos será de cinco días hábiles, transcurridos los cuales, en ausencia de pronunciamiento expreso, podrá continuarse el procedimiento.».

Disposición transitoria. *Régimen transitorio.*

1. A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley, con excepción de lo dispuesto en el apartado 2, no les será de aplicación la misma rigiéndose por la normativa anterior; en particular, no resultará de aplicación a los procedimientos ya iniciados de elaboración de disposiciones de carácter general y de resolución contractual.

2. A los procedimientos sancionadores ya iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 35 ter de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, en redacción dada al mismo por el artículo 1, apartado treinta y seis, de esta ley y, por tanto, las reducciones que en el mismo se establecen para el trámite de la instrucción en que se encuentren dichos procedimientos.

Disposición derogatoria. *Derogación normativa.*

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

Disposición final primera. *Modificación de la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés.*

Se modifica el apartado 1 del artículo 14 de la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, el cual queda redactado del siguiente modo:

«1. En la Administración del Principado de Asturias, será competente para resolver las solicitudes de acceso la persona titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería en la que obre la información pública.

Si la solicitud de acceso se refiere a documentos o expedientes que se encuentren depositados en el Archivo General del Principado de Asturias o a datos que obren en los registros públicos regulados por la Administración del Principado de Asturias, corresponderá su resolución a quien sea titular del órgano central del que dependa el Archivo General o el registro público.

De todas las solicitudes de acceso y resoluciones sobre las mismas se remitirá una copia a la Consejería competente en materia de transparencia, para su seguimiento, archivo y registro.».

Disposición final segunda. *Modificación de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración.*

Se modifica el apartado 1 del artículo 10 de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración, el cual queda redactado de la siguiente forma:

«1. Son órganos centrales de las Consejerías la Secretaría General Técnica, las Direcciones Generales y la Intervención General, cuyos titulares tendrán la consideración de altos cargos. Con la naturaleza de órgano central y consideración para sus titulares de alto cargo podrán crearse Viceconsejerías. El número de Viceconsejerías no podrá ser superior al de Consejerías.».



Junta General del Principado de Asturias

Disposición final tercera. *Modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2023, de 15 de marzo, de Calidad Ambiental.*

Se modifica el apartado 2 del artículo 46 de la Ley del Principado de Asturias 1/2023, de 15 de marzo, de Calidad Ambiental, el cual queda redactado de la siguiente forma:

«2. La resolución motivada que otorgue o deniegue la autorización ambiental integrada ordinaria se dictará en el plazo máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud completa. Transcurrido el plazo establecido sin que se haya notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud presentada.».

Disposición final cuarta. *Modificación de la Ley del Principado de Asturias 2/2024, de 30 de abril, de Impulso Demográfico.*

Se modifica el apartado 1 del artículo 9 de la Ley del Principado de Asturias 2/2024, de 30 de abril, de Impulso Demográfico, el cual queda redactado de la siguiente forma:

«1. La Administración del Principado de Asturias y el sector público autonómico, en el marco de la normativa básica vigente en materia de contratación pública, velarán por la incorporación en los pliegos de prescripciones técnicas, definidores de las obras, servicios y suministros que precisen para el ejercicio de sus competencias, de requisitos y características específicas sociales y medioambientales que guarden relación con el objeto del contrato, sean proporcionales, estén motivados en el expediente, mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten y redunden en la mejora del medio rural, propiciando las adquisiciones de productos ecológicos, frescos y de temporada, así como productos amparados por las marcas de calidad diferenciada regional, siempre que ello sea conforme con la normativa básica estatal en materia de contratación pública y con el derecho comunitario; propiciando igualmente la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión forestal sostenible, las energías renovables y el ahorro energético.».

Disposición final quinta. *Reglamentos del procedimiento sancionador, del Registro Electrónico de Apoderamientos y del Registro de Convenios.*

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, se aprobarán un reglamento del procedimiento sancionador en el ámbito del Principado de Asturias, un reglamento del Registro Electrónico de Apoderamientos del Principado de Asturias y un reglamento del Registro de Convenios.

Disposición final sexta. *Habilitación para aprobar un texto refundido de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración.*

Al efecto de consolidar en un texto único las modificaciones incorporadas desde su entrada en vigor, a la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, se autoriza al Consejo de Gobierno para elaborar y aprobar, a propuesta de la Consejería con competencias en materia de régimen jurídico y organización administrativa, en un plazo de doce meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley, un texto refundido de la citada norma. Esta autorización incluye la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que deban ser refundidos.

Disposición final séptima. *Desarrollo normativo.*

Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo y la aplicación de esta ley.



Junta General
del Principado de Asturias

Disposición final octava. *Entrada en vigor:*

La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el *Boletín Oficial del Principado de Asturias*.



Junta General
del Principado de Asturias

Enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Popular al «Proyecto de Ley del Principado de Asturias de novena modificación de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, y de medidas legales sectoriales de simplificación administrativa»

(Calificada como de totalidad y admitida a trámite por la Mesa de la Comisión de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, y de Vicepresidencia, en la sesión celebrada el 3 de julio de 2025, y publicada en el Boletín Oficial de la Junta General, serie A, número 25.7, de 4 de julio de 2025).



Junta General
del Principado de Asturias

Junta General del Principado de Asturias - REGISTRO ENTRADA N°: 0020740 30.JUN.2025 13:26



A LA MESA DE LA CÁMARA

Álvaro Queipo Somoano, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad a lo previsto en los artículos 148 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley del Principado de Asturias de novena modificación de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, y de medidas legales sectoriales de simplificación administrativa (12/0142/0009/14556):

ENMIENDA

Enmienda a la totalidad sobre la oportunidad, principios y espíritu del proyecto de Ley, proponiendo texto completo alternativo al del Proyecto sobre el mismo objeto, que quedaría redactado como sigue:

LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y REDUCCIÓN DE CARGAS BUROCRÁTICAS.

PREÁMBULO

I

1. Las demandas ciudadanas de reducción de cargas administrativas y de simplificación normativa no han dejado de crecer en los últimos años. Podría considerarse un verdadero clamor el que reivindica, cada vez más, respuestas rápidas y reglas sencillas a nuestras Administraciones. La celeridad que ha imprimido en nuestra sociedad la vida moderna, especialmente como consecuencia de la digitalización, no ha tenido hasta el momento su conveniente traslación a la gestión pública, anclada en modos que parecen más propios de otras épocas. Esa inercia administrativa, junto con la desatención hacia la calidad de las normas o el desajuste entre el dinamismo que despliegan los asturianos en infinidad de terrenos y la premiosa reacción de sus poderes públicos, constituye sin duda un grave problema que procede ser abordado sin demora.
2. El contexto en el que esta situación se ha generado es complejo. Desde la perspectiva regulatoria, hemos ido acumulando un conjunto de leyes y reglamentos sin duda esenciales para el correcto desarrollo autonómico, pero no siempre velando por su vigencia o su adecuada actualización a los tiempos. La tendencia que ha presidido estas décadas de producción normativa en el Principado de Asturias, sobre todo tras la consolidación de nuestro marco competencial, ha estado más centrada en la creación de nuevas disposiciones que al debido control de lo que habrían de dar de sí las existentes.



Junta General del Principado de Asturias



Ello ha conducido a la acumulación de un acervo legislativo y reglamentario de considerable densidad, que precisa aligerarse y hacerse más comprensible y aplicable.

3. Al servicio de esta controvertida coyuntura normativa se ha dispuesto, además, una estructura organizativa de dimensiones crecientes, y una plantilla de empleados públicos de paralelas proporciones. Este personal con el que cuentan nuestras Administraciones para el desempeño de los numerosos mandatos legales o reglamentarios en el Principado, sin embargo, resulta en ocasiones insuficiente para abordarlos con la necesaria agilidad, por la ausencia de una auténtica cultura de simplificación en su labor cotidiana, lastrada por déficits en su formación sobre tales cuestiones y por la propia realidad de una organización administrativa en buena medida desvinculada de conceptos tales como la agilidad o la proactividad hacia el destinatario final de sus actuaciones. Pese al denodado esfuerzo y dedicación de estos cuerpos funcionariales, la ausencia de criterios que racionalicen su trabajo, y en especial que establezcan pautas tendentes a una profunda transformación de su cometido en aras de un mejor servicio al ciudadano, les ha convertido en blanco de las críticas, cuando la censura debiera más bien dirigirse a propia urdimbre normativa y organizativa en la que deben desenvolver su quehacer.
4. Otra de las causas que coadyuva a la generalizada percepción ciudadana de una Administración obstaculizadora en lugar de acompañadora o colaborativa es la referida a la cuestión procedimental. Hemos de contar con procedimientos administrativos capaces de ser sustanciados y resueltos en plazos breves, sin merma alguna de lo que les es propio, que es asegurar una acertada decisión administrativa en la que todos los factores sean tenidos en cuenta. Para ello es urgente reducir el tiempo de respuesta, así como de los principales trámites que en ellos procede cumplimentar. Y suprimir si es el caso aquellos expedientes superfluos o reiterados en más de una oficina pública. El uso de las herramientas digitales debiera colaborar, en fin, a este deseable objetivo consistente en reducir la burocracia innecesaria y centrarse en lo principal, que pasa mejorar la confianza de la sociedad hacia sus sujetos públicos, el progreso económico y el buen gobierno.
5. De la simplificación en estos tres ámbitos, el regulatorio o normativo, el organizativo y el procedimental, se ocupa esta Ley. Como se ha señalado con acierto en la legislación autonómica comparada que se ha venido promulgando sobre esta materia, de lo que se trata no es de tanto reducir la Administración como de mejorarla. De profundizar en un proceso integral o estrategia global que cambie su dinámica hacia un escenario facilitador. De eliminar trámites innecesarios y de abreviar los existentes al máximo, contribuyendo a restablecer la buena imagen de lo público, lastrada por una percepción popular negativa precisamente por los inconvenientes que en esta Ley se pretenden combatir.



Junta General
del Principado de Asturias



II

6. Aunque la loable intención de esta Ley sea la de promover en el Principado de Asturias la simplificación administrativa, su ambición no puede ser completa habida cuenta de la concurrencia estatal de competencias básicas sobre procedimiento administrativo y régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Sin el decisivo concurso del legislador estatal, pues, los deseos de transformación en esta crucial materia no pueden alcanzar los umbrales óptimos. Con todo, existen atribuciones estatutarias exclusivas que permiten ahondar en ese camino, como las de organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno; las de procedimiento administrativo derivado de las especializadas de nuestra propia organización; las de ordenación del territorio, el urbanismo o la vivienda; o las de Academias. Existen, igualmente, competencias compartidas que avalan esta normación, como las de régimen local, corporaciones de derecho público, o las de medio ambiente, caza y pesca.
7. Aquellas Comunidades Autónomas que, en legítimo ejercicio de sus capacidades estatutarias, han decidido abordar este importante reto de la simplificación administrativa, lo han acometido a través de figuras muy dispares. En unas ocasiones, se han limitado a establecer los principios a los que habría sujetarse este magno objetivo, para posteriormente ser desarrollados en nuevas normas de desarrollo. En otras oportunidades, han preferido reunir en un mismo articulado las cuestiones vinculadas a la simplificación administrativa junto con las previstas para los incentivos a la actividad empresarial o industrial. A veces, han introducido disposiciones sobre la digitalización, la inteligencia artificial o las sedes electrónicas. Algunas, en fin, han incluido aquellas modificaciones legislativas o derogaciones de las disposiciones dispersas por el ordenamiento que se han considerado obstaculizadoras o prescindibles desde la triple vertiente de la simplificación normativa, organizativa y procedimental.
8. De los modelos autonómicos comparados se deduce, pese a su amplia variedad, el confesado propósito de enfrentar las demoras administrativas innecesarias a través de trámites más cortos, una estructura organizativa racionalizada y una reducción de las cargas que debe padecer el ciudadano en su relación con las Administraciones Públicas. La mayor parte incluyen como herramientas útiles el plazo máximo para resolver y notificar una decisión administrativa, fijada en tres meses salvo excepciones justificadas en que se extienda a los seis meses. Y la sustitución donde sea posible de las clásicas licencias o autorizaciones por declaraciones responsables o comunicaciones, y el efecto del silencio administrativo positivo en caso de resolución tardía de procedimientos.
9. En el caso específico asturiano, la Ley 4/2021, de 1 de diciembre, de Medidas Administrativas Urgentes, introdujo diversas medidas tendentes a la simplificación administrativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma, modificando a tal efecto distintas leyes. Pese a la bondad de sus previsiones y objetivos, algunos de los instrumentos de simplificación, como las declaraciones responsables y comunicaciones,



Junta General del Principado de Asturias



figuraban en el texto como meras opciones, sin construir propiamente un deber público, y sin contemplar tampoco otras fórmulas simplificadoras extendidas por la legislación autonómica comparada. Con anterioridad a esta Ley del Principado, su Consejo de Gobierno acordó con fecha 11 de enero de 2017, la creación de la Comisión de Simplificación Administrativa, modificada en cuanto a su composición en 2020 y 2024. Dicha Comisión elaboró un Manual de Simplificación Administrativa del Principado de Asturias.

10. La presente Ley, recogiendo estas experiencias regulatorias, pretende además promover propuestas innovadoras, que redunden en su objetivo final de reducir la burocracia en Asturias. Entre ellas se prevé la creación de un grupo de trabajo sobre simplificación administrativa, nutrido por representantes de los Colegios Profesionales, Cámaras de Comercio, Academias, agentes sociales y representantes de la Administración Local, dedicado al estudio de las reformas que proceda abordar en la materia legal o reglamentaria, organizativa y procedimental de incumbencia autonómica. Dicho grupo, de carácter consultivo, podría servir como útil herramienta para proponer aquellas actualizaciones, modificaciones o derogaciones que procedan, pudiendo también tener iniciativa para la confección de nuevas normas, cuando resulte necesario. A este grupo les serán sometidas las propuestas que, sobre simplificación, deberán aportar las correspondientes Consejerías y la Federación Asturiana de Concejos, en el ámbito municipal.
11. También se incorpora el mandato de incluir en las memorias de impacto normativo de las nuevas disposiciones el estudio de las cargas administrativas que se proponen eliminar, y del principio de conservación de la norma existente si no se justifica debidamente la nueva normación.

III

12. La presente Ley se estructura en cinco títulos (preliminar y primero a cuarto), distribuidos en 34 artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
13. En el título preliminar se plasma el objetivo de la Ley, concretando su ámbito de aplicación, sus principios generales y los criterios que han de guiar la simplificación administrativa. Se incluye un deber general de promoverla en cada ámbito del quehacer público en el Principado de Asturias.
14. En el título primero, se prevé el cauce para lograr la simplificación en los ámbitos normativo, organizativo y procedimental, confiando en la capacidad de propuesta de cada consejería en la materia, junto con la del ente aglutinador de los concejos asturianos. Dichas propuestas, que habrán de satisfacer los principios generales descritos en el título preliminar, deberán ser evaluadas por el grupo de trabajo sobre



Junta General del Principado de Asturias



simplificación administrativa del Principado de Asturias, siendo su parecer no vinculante para la decisión final de implementar estas medidas de simplificación, que correrán a cargo del Gobierno del Principado tras la oportuna reforma legal que proceda en cada caso, mediante Ley de la Junta General del Principado de Asturias.

15. El título segundo, en sus dos capítulos, se proyecta sobre la intervención administrativa sobre las actividades económicas, generalizando el régimen de la declaración responsable y la comunicación, en sustitución de las clásicas licencias o autorizaciones, cuando ello resulte posible legalmente. De igual modo, en este título se contempla la reducción del plazo máximo para resolver los procedimientos, de tres meses, y de los informes que deben recaer en ellos, de diez días, estableciendo el silencio positivo en caso de respuesta tardía de los primeros y de prosecución del expediente por sus trámites en el segundo caso. Con el marco sancionador por incumplimientos de este régimen concluye este título.
16. En el título tercero se aborda la incorporación de medios facilitadores de la simplificación, como la inteligencia artificial; el derecho ciudadano a un espacio personalizado en la sede electrónica del Principado de Asturias, donde pueda comunicarse e interactuar con las Administraciones Públicas; o la carpeta de servicios donde se muestren todos los procedimientos existentes en nuestros sujetos públicos y los pormenores de su sustanciación y resolución.
17. En el título cuarto se prevén medidas específicas sobre la producción normativa, obligando a analizar la reducción de cargas administrativas en cada nueva norma, así como el mantenimiento de las existentes, en su caso operando sobre ellas las correspondientes modificaciones.

IV

18. Al amparo de lo establecido en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presente Ley responde en su integridad a los principios de buena regulación. Y en particular a los de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficacia, como queda suficientemente acreditado en este preámbulo. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la presente iniciativa normativa está justificada por una razón de interés general notoria, la comprensiva de una gestión pública ágil, acompañadora, facilitadora, segura y colaborativa con los ciudadanos, identificando con claridad los fines que persigue y siendo el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.



Junta General
del Principado de Asturias



19. La presente ley promueve, además, una mayor eficacia en el quehacer público, al minimizar las cargas administrativas innecesarias, generalizando las declaraciones responsables y las comunicaciones, tendiendo a racionalizar los recursos públicos. Con el régimen de simplificación y mejora organizativa y regulatoria que introduce, se garantiza el principio de proporcionalidad, al prever reformas estructurales para la organización y funcionamiento del sector público.
20. En cuanto a la seguridad jurídica, la Ley se confecciona en entera coherencia con el resto del ordenamiento interno y comunitario, respetando y adaptando la legislación básica estatal y promoviendo lo que el artículo 130. 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre establece, de revisión periódica de la normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. Es más, el mandato legal de evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica por las Administraciones (artículo 130. 2 Ley 39/2015, de 1 de octubre), cumplidamente se acoge en la presente Ley.



Junta General
del Principado de Asturias



TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Esta Ley tiene como finalidad establecer medidas de simplificación administrativa destinadas a la mejora de la calidad regulatoria, organizativa y procedimental. Se consideran medidas de simplificación administrativa aquellas iniciativas que redunden en una buena regulación, en una transformación organizativa y digital del sector público, en una modernización y racionalización administrativa, así como en la agilización de procedimientos y reducción de cargas administrativas para el ciudadano y las empresas.
2. Esta Ley se aplicará a la Administración del Principado de Asturias, su sector público y a los entes que integran la Administración Local en Asturias, incluidas sus personificaciones dependientes.

Artículo 2. Deber general de promover la simplificación administrativa.

Los sujetos públicos sometidos a esta Ley deberán promover, de forma efectiva, la simplificación administrativa en el ejercicio de sus competencias, optando por aquellas alternativas regulatorias, organizativas o procedimentales que impliquen menores cargas para los ciudadanos y empresas.

Artículo 3. Principios generales.

Son principios rectores de esta Ley los siguientes:

- a) Principio de buena regulación. De acuerdo con él, las iniciativas regulatorias habrán de adecuarse a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia., previendo en el ejercicio de sus competencias aquellas medidas menos restrictivas para el ejercicio de derechos individuales o colectivos, motivando su necesidad para la protección del interés público y justificando su adecuación para lograr los fines, sin que se produzcan diferencias de trato discriminatorias.
- b) Principio de coordinación y colaboración. Las Administraciones Públicas en el Principado de Asturias desarrollarán fórmulas de coordinación, colaboración y ejercicio conjunto de facultades de intervención sobre actividades, a fines de simplificación administrativa y de agilidad en la tramitación y ejecución de proyectos concretos o sectores específicos.



Junta General
del Principado de Asturias



c) Principio de transversalidad organizativa. Las Administraciones Públicas establecerán medidas de gestión flexibles que permitan tramitar los procedimientos que trasciendan las competencias propias de una consejería o ente.

d) Principio de servicio efectivo a la ciudadanía. Las Administraciones Públicas habrán de orientar y facilitar con eficacia y eficiencia las necesidades ciudadanas que dependan de un requisito administrativo, y habrán de hacerlo con celeridad, con economía procedimental y organizativa, racionalizando y agilizando los expedientes, unificando procedimientos o suprimiéndolos si se estiman superfluos, y con transparencia.

Artículo 4. Criterios de simplificación administrativa.

Toda iniciativa de simplificación administrativa deberá observar los siguientes criterios:

a) Simplificación, unificación o supresión de regulación, organización o procedimientos, sin merma de garantías jurídicas y cumpliendo el régimen de transparencia.

b) Reducción de plazos administrativos y supresión, acumulación o simplificación de trámites innecesarios, redundantes o que no contribuyan a una mejora de la actividad administrativa, sin merma de las garantías exigibles y en régimen de transparencia de la actividad administrativa.

c) Supresión de cargas administrativas recurrentes, obsoletas e innecesarias para la adecuada resolución de los procedimientos.

d) Fomento de las declaraciones responsables y las comunicaciones, como alternativa a autorizaciones y licencias, en aquellos procedimientos en que la legislación básica no exija autorizaciones y no existan razones imperiosas de interés general para mantenerlas, reduciendo la aportación de documentos y requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, sin merma de las garantías exigibles ni de la transparencia y control públicos de la actividad administrativa.

e) Actualización regulatoria, incluyendo propuesta de derogaciones normativas obsoletas.

f) Normalización de modelos administrativos digitales que faciliten la actuación ciudadana o empresarial ante las Administraciones, cuando ello resulte obligado.



Junta General del Principado de Asturias



- g) Resolución automatizada e inmediata para el reconocimiento de derechos o facultades por el ciudadano y las empresas, así como para su renovación o continuidad de su ejercicio.
- h) Transformación digital de las Administraciones, potenciando la relación electrónica con los ciudadanos, garantizando unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en los dispositivos y servicios electrónicos empleados por personas con discapacidad y mayores, en plena igualdad de uso, reduciendo la brecha digital y garantizando una atención personal sustitutoria para aquellos ciudadanos a los que les resulte imposible la comunicación por vía electrónica.
- i) Revisión de la necesidad de determinados registros y, en caso de serlo, posibilidad de inscripción de oficio y de vigencia indefinida de la inscripción.
- j) Mejora de la información sobre requisitos, documentación y procedimientos, cumpliendo las obligaciones generales de transparencia y las específicas que establece la presente ley.
- k) Formación específica de los empleados públicos sobre simplificación administrativa.
- l) Promoción de la publicación de catálogos de servicios y de buenas prácticas de simplificación administrativa.
- ll) Sustitución del sentido desestimatorio del silencio administrativo por un sentido estimatorio, salvo que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.
- m) Agrupación documental en un único documento de las manifestaciones que declaraciones, certificaciones o actuaciones de naturaleza formal que deba realizar una misma persona.
- n) Reordenación y coordinación de competencias entre los diferentes órganos que participan en los procedimientos, favoreciendo de forma efectiva la simplificación de la actividad administrativa.
- o) Reasignación del personal para eficaz distribución de las cargas de trabajo público, de acuerdo con la normativa vigente en materia de función pública.



Junta General
del Principado de Asturias



TÍTULO I

Planificación y Organización de la Simplificación Administrativa

Artículo 5. Coordinadores de simplificación administrativa.

En cada consejería del Principado de Asturias y en cada ente local deberá nombrarse entre sus plantillas de empleados públicos a un coordinador de simplificación administrativa, que habrá de encargarse de velar por los tiempos de respuesta al ciudadano, de proponer las medidas de simplificación normativa, organizativa y procedimental que procedan en su ámbito competencial, y de plantear el uso de aplicaciones informáticas facilitadoras de los objetivos de reducción burocrática. La designación del coordinador será competencia de la Consejería en materia de Función Pública, y en el caso municipal, de la Alcaldía. Los coordinadores de simplificación administrativa deberán emitir informe sobre su cometido semestralmente y elevarlo al Consejo de Gobierno para su conocimiento y demás efectos.

Artículo 6. Grupo de Trabajo sobre simplificación administrativa.

Las medidas de simplificación administrativa propuestas por los coordinadores previstos en el artículo 5 de esta Ley, antes de hacerse efectivas o de aprobarse a través de la oportuna norma, serán sometidas al conocimiento de un grupo de trabajo en el que estarán presentes, previa invitación cursada a tal efecto por el Gobierno del Principado, representantes de los Colegios Profesionales, Cámaras de Comercio, Academias, Universidad de Oviedo y otras universidades radicadas en Asturias, Federación Asturiana de Concejos, Sindicatos y Organizaciones empresariales. Dicho grupo de trabajo, que también tendrá capacidad para proponer medidas, deberá emitir su parecer sobre las iniciativas de simplificación, que no será vinculante para su ulterior aprobación por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. En su caso, se suscribirán por el Principado convenios de colaboración con dichas entidades, a fin de incluir su régimen jurídico y económico, que deberá prever su participación voluntaria y su cometido.

Artículo 7. Plan de Simplificación Administrativa en el Principado de Asturias.

Las propuestas de los coordinadores de simplificación administrativa, tras su evaluación por el grupo de trabajo previsto en el artículo 6 de esta Ley, serán aprobadas por el Consejo de Gobierno del Principado con periodicidad anual. Aquellas medidas que supongan alteraciones de disposiciones legales habrán de ser canalizadas como proyectos de Ley ante la Junta General del Principado. El Plan deberá contemplar sus objetivos, programación, seguimiento, y plazos para su implementación definitiva y puesta en marcha de las medidas de simplificación, que no podrán superar los tres meses desde su aprobación, salvo que estén supeditadas a reformas legales.



Junta General
del Principado de Asturias



El Plan de Simplificación Administrativa deberá ser publicado en el portal de Transparencia del Principado de Asturias y de los entes locales a los que la presente ley es de aplicación.

Artículo 8. Catálogo de Buenas Prácticas.

Las experiencias sobre simplificación administrativa aprobadas en el Plan previsto en el artículo 7 de esta Ley, se incorporarán cada dos años al Catálogo de Buenas Prácticas en materia de Simplificación a elaborar por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a fin de estimular las iniciativas relevantes sobre la reducción de cargas burocráticas en las distintas Administraciones. Dicho Catálogo será publicado en el portal de Transparencia del Principado de Asturias y de los demás entes a los que la presente Ley se aplica.

Artículo 9. Formación de empleados públicos.

Las Administraciones Públicas a las que se aplica esta Ley garantizarán la formación permanente y específica de su personal en materia de simplificación administrativa en su triple vertiente normativa, organizativa y procedimental, así como en materia de competencias digitales.

TÍTULO II

Medidas de Impulso a la Simplificación Administrativa

CAPÍTULO I.

Simplificación Procedimental e Intervención Administrativa

Artículo 10. Coordinación procedimental.

1. El Principado de Asturias promoverá la suscripción de convenios o protocolos de actuación con las restantes Administraciones Públicas radicadas en su territorio, a fin de desarrollar instrumentos de colaboración y coordinación para el ejercicio conjunto de sus facultades de intervención sobre las actividades económicas, tanto de policía como de inspección y sanción, con la finalidad general de impulsar la simplificación administrativa y de agilizar el otorgamiento o control de los títulos habilitantes de desarrollo de actividades económicas, la ejecución de proyectos concretos o de sectores económicos específicos o la resolución temprana de cualesquiera procedimientos administrativos.
2. Mediante la gestión coordinada de procedimientos podrá establecerse un marco para el ejercicio de una competencia o de un conjunto de competencias que corresponden a diferentes Administraciones públicas, organismos públicos u órganos administrativos, para la autorización de una actividad o proyecto concretos o de sectores económicos específicos. La gestión coordinada se acordará por orden de la Consejería competente o,



Junta General
del Principado de Asturias



cuando sean varias, por orden conjunta, y mediante convenio o protocolo cuando se trate de distintas Administraciones públicas.

Artículo 11. Racionalización de la intervención administrativa.

Las Administraciones Públicas a las que es de aplicación esta Ley promoverán en los procedimientos de su competencia la utilización de la declaración responsable y la comunicación como técnicas de intervención administrativa sobre la actividad de los particulares en el marco establecido en la normativa básica del Estado y la normativa sectorial aplicable. Para ello, revisarán periódicamente sus procedimientos autorizatorios a fin de sustituir autorizaciones o licencias por declaraciones responsables o comunicaciones, promoviendo las modificaciones legales que fueren pertinentes.

Artículo 12. Aplicación de la declaración responsable y la comunicación.

1. La declaración responsable y la comunicación se aplicarán en cualquier ámbito de competencia autonómica, con la única excepción de los supuestos en los que la normativa de la Unión Europea o del Estado, de aplicación directa o básica, exijan declaraciones, autorizaciones o licencias previas. En aplicación de los principios de necesidad y proporcionalidad podrán mantenerse, de forma motivada, autorizaciones o licencias previas mediante Ley en los supuestos recogidos en el artículo 17, apartado 1, de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la unidad de mercado.
2. Las declaraciones responsables serán exigibles en aquellos supuestos en los que la normativa vigente establezca la necesidad de acreditación del cumplimiento de determinados requisitos por parte de las personas interesadas, bien para el reconocimiento de un derecho o facultad, bien para su ejercicio.
3. En la declaración responsable constará la manifestación del declarante, bajo su responsabilidad, de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio; de que dispone de la documentación que así lo acredita; de que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida; y de que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. El declarante deberá manifestar lo anterior de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable.
4. Las Administraciones Públicas a las que se aplica esta Ley deberán elaborar modelos de declaración responsable y mantenerlos actualizados y publicados, en soportes fácilmente accesibles para los interesados, también en formato digital y garantizando su lectura fácil y el lenguaje claro.



Junta General del Principado de Asturias



5. La Administración que promueva el régimen de declaración responsable o comunicación deberá contar, con carácter previo a su implementación, con servicios de inspección y control con capacidad suficiente para asumir las funciones de comprobación, inspección y sanción en el ámbito de que se trate.
6. Las comunicaciones serán exigibles en aquellos otros supuestos en los que únicamente se deba poner en conocimiento de la Administración o de las entidades del sector público los datos para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho por parte de las personas interesadas.
7. Se entiende por comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. No obstante, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.
8. El órgano o entidad competente deberá elaborar modelos de comunicación y mantenerlos actualizados y publicados, fácilmente accesibles para los interesados.

Artículo 13. Efectos de las declaraciones responsables y comunicaciones.

1. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones públicas competentes.
2. Únicamente será exigible una declaración responsable o una comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente.

Artículo 14. Control e inspección de declaraciones responsables y comunicaciones.

1. Las Administraciones podrán requerir en cualquier momento, en el ejercicio de su potestad de inspección y control, que los declarantes o comunicantes aporten la documentación exigible conforme a la normativa que resulte de aplicación, siendo de carga del interesado aportarla.
2. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación en tiempo y forma de ambas, o de la documentación que en su caso sea requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado o comunicado tendrá, sin



Junta General del Principado de Asturias



perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, las siguientes consecuencias:

- a) La imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o desarrollando la actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos.
 - b) La resolución de la Administración pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento anterior al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales que resulten de aplicación.
3. La inspección o comprobación posterior de lo declarado o comunicado comprenderá la totalidad de las manifestaciones y documentos objeto de la declaración responsable o la comunicación. Salvo que se establezca otro plazo por norma legal o reglamentaria, la actividad de comprobación tendrá lugar dentro del plazo máximo de seis meses desde la presentación de la declaración responsable o comunicación, o en su caso, desde la presentación de la subsanación de las deficiencias advertidas. La normativa sectorial podrá establecer un plazo de comprobación inferior al establecido en esta ley.
 4. Transcurrido el plazo máximo para la actividad de comprobación, el declarante o comunicante tendrá derecho a solicitar la emisión por el órgano o entidad competente de un acto de conformidad que avale la actividad de que se trate, documento que deberá expedirse en el plazo de diez días desde su petición.
 5. La actividad de comprobación no impedirá el pleno ejercicio de la potestad de inspección conforme a lo que establezca la legislación sectorial aplicable.
 6. El declarante o comunicante, de no surtir efectos sus declaraciones o comunicaciones por las circunstancias expresadas en los números 2 y 3 de este artículo, podrán reclamar por daños y perjuicios frente a los técnicos o entidades que hayan preparado la documentación de este carácter aportada ante la Administración, de resultar responsables de dichas circunstancias.

Artículo 15. Entidades Colaboradoras de Certificación y Entidades habilitadas.

1. Por entidad colaboradora de certificación se entiende, a efectos de esta Ley, toda persona jurídica que, debidamente acreditada e inscrita en el registro de entidades colaboradoras de certificación del Principado, desarrolle tareas de comprobación, informe y certificación en los ámbitos en los que hayan de aplicarse declaración responsable o comunicación como régimen de intervención administrativa o en aquellos otros en que se establezca



Junta General
del Principado de Asturias



normativamente, sin que tales entidades colaboradoras de certificación puedan sustituir las potestades propias de la Administración autonómica o local en esta materia.

2. La acreditación y registro de entidades colaboradoras de certificación corresponderá al Principado de Asturias, considerándose como tales a aquellas entidades acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación mediante el sistema previsto en la norma UNEEN ISO/IEC 17020 o norma que la sustituya, así como aquellos colegios profesionales, cuyos colegiados ejercientes, individualmente o asociados en las formas que autoricen las normas profesionales, estén legitimados para actuar en el ámbito de competencias profesionales que les confiera legalmente el título que ostenten.
3. También podrán acreditarse y registrarse como entidades colaboradoras de certificación aquellas personas jurídicas legalmente constituidas que cuenten con profesionales habilitados para el ejercicio de las funciones propias de las entidades colaboradoras de certificación en el ámbito de actividad de que se trate y con experiencia profesional efectiva plasmada en trabajos propios de la respectiva profesión, como proyectos o dirección facultativa o de informe o dictamen técnicos sobre construcciones, edificaciones, instalaciones, entre otros. Estas personas jurídicas deberán, asimismo, no haber perdido la condición de entidad colaboradora ni tener prohibido el desarrollo de la actividad de certificación regulada en esta Ley en virtud de resolución administrativa o judicial firme, tener suscrita y en vigor póliza de cobertura de los riesgos por responsabilidad profesional, cumplir con los requisitos específicos que puedan establecerse para cada actividad en la que hayan de ejercer sus funciones y no encontrarse en situación de concurso que impida el ejercicio de su actividad de conformidad con lo establecido en la normativa concursal. El funcionamiento y requisitos de este registro se establecerá reglamentariamente.
4. La solicitud de acreditación y registro como entidad colaboradora se dirigirá a la Consejería competente por razón de la materia, que, previo informe de comprobación, remitirá la propuesta de acreditación o denegación a la Consejería competente en materia de simplificación administrativa. La acreditación y registro habrá de resolverse en el plazo de tres meses y deberá determinar la actividad de certificación interesada. Transcurrido dicho plazo sin notificación de resolución expresa podrá entenderse estimada la solicitud.
5. El incumplimiento sobrevenido de cualesquiera de los requisitos de acreditación determinará la pérdida de la acreditación, previa tramitación de expediente contradictorio.



Junta General del Principado de Asturias



6. Las entidades colaboradoras de certificación deberán desarrollar sus funciones por sí mismas o, en el caso de los colegios profesionales, a través de sus colegiados. No obstante, cuando en el ejercicio de su actividad deba concurrir la actuación de entidades colaboradoras en diferentes sectores de actividad, podrán colaborar por cualquier forma admitida en Derecho, incorporándose los certificados accesorios al principal.
7. Son funciones de las entidades colaboradoras de certificación las siguientes:
 - a) Realizar comprobaciones, informes y certificaciones en su ámbito de actividad, firmados por técnico competente de acuerdo con la titulación exigida.
 - b) Emitir un documento-resumen en el que consten los requisitos principales de la actividad o establecimiento de que se trate y que, cuando proceda conforme a la normativa sectorial, deberá exponerse por el titular de la actividad o establecimiento en un lugar visible y legible para terceros.
 - c) Las que les atribuya la normativa sectorial en cada ámbito específico.
8. Son obligaciones de las entidades colaboradoras de certificación las siguientes:
 - a) Crear y mantener un registro permanente de las certificaciones que emitan.
 - b) Mantener los expedientes y la documentación derivada de sus funciones en formato que permita su consulta, garantizando la confidencialidad en cumplimiento de lo establecido en la normativa sobre protección de datos.
 - c) Mantener los requisitos y condiciones que justificaron su acreditación, incluyendo las obligaciones que estos comportan.
 - d) Cumplir las condiciones contenidas en la resolución de acreditación y las establecidas en esta ley, la legislación sectorial y sus disposiciones de desarrollo.
 - e) Emplear los métodos, sistemas y medios materiales oficialmente aprobados en la normativa en vigor, aquellos acreditados por entidad oficial de acreditación o, en su defecto, los adoptados por organismos nacionales o internacionales de reconocida solvencia, siempre debidamente actualizados o renovados.
 - f) Disponer de modelos de hojas de reclamaciones de acuerdo con lo previsto en la normativa en vigor.
 - g) Disponer del personal con capacidad y legitimación suficientes para ejercer las funciones que les corresponden, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
9. Tanto las entidades colaboradoras de certificación como su personal deberán garantizar la confidencialidad respecto de la información que obtengan en el desarrollo y ejecución de sus funciones. El incumplimiento de esta obligación será considerado como causa de revocación de la inscripción en el registro previsto en esta norma, sin perjuicio de las sanciones que le puedan corresponder en aplicación de la presente ley y la legislación de protección de datos.



Junta General del Principado de Asturias



10. Las entidades colaboradoras de certificación deberán desarrollar sus funciones por sí mismas o, en el caso de los colegios profesionales, a través de sus personas colegiadas, no podrán tener relación jurídica con las personas, entidades o empresas que los contraten para ejercer sus funciones, o con las que participen en el diseño o ejecución de la actividad o proyecto sujeto a su consideración, que pueda producir dependencia, subordinación o conflicto de intereses que, en cualquier forma, pueda afectar a su objetividad e independencia de criterio. Se considerará que existe tal dependencia, al menos, cuando concurran las causas de abstención y recusación previstas en la legislación de régimen jurídico del sector público.
11. Sin perjuicio de cualesquiera otras responsabilidades que pudieran concurrir, no producirán efecto las actuaciones o documentos emitidos en ejercicio de sus funciones por las entidades colaboradoras de certificación con infracción de lo establecido en el apartado anterior.
12. Los colegios profesionales acreditados como entidad colaboradora de certificación podrán exigir en cualquier momento a sus colegiados declaración o acreditación de que no concurren las circunstancias establecidas en el número 10 de este precepto.
13. Las entidades colaboradoras de certificación serán responsables de los certificados que emitan. Cuando actúe un colegiado en colegio profesional acreditado en cuyo ámbito profesional resulte exigible seguro de responsabilidad civil profesional, el colegio profesional, en su condición de entidad colaboradora de certificación, y el profesional serán solidariamente responsable.
14. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley podrán servirse de entidades habilitadas, siendo estas aquellas personas físicas o jurídicas ajenas a la Administración que podrán realizar determinados trámites electrónicos en representación de los interesados, en las condiciones establecidas en la legislación básica de sector público.
15. La habilitación a través de estas entidades requerirá la firma previa de un convenio entre el órgano administrativo u organismo público vinculado o dependiente competente y la organización o corporación de que se trate, de acuerdo de lo previsto en la legislación de régimen jurídico del sector público. El convenio deberá especificar, al menos, los procedimientos y trámites objeto de la habilitación, el carácter general o específico de la habilitación y las condiciones y obligaciones aplicables tanto a la entidad firmante del convenio, como a las personas físicas o jurídicas habilitadas y determinará la presunción de validez de la representación, si bien en cualquier caso se



Junta General
del Principado de Asturias



podrá requerir por el órgano competente en la tramitación del procedimiento la acreditación de dicha representación.

16. A estos efectos, se aprobará por el Principado de Asturias un modelo normalizado de convenio que permita dar soporte a esta habilitación en los términos y condiciones que las partes acuerden, conforme a lo dispuesto en la legislación de régimen jurídico del sector público. En la sede electrónica o sede electrónica asociada de cada una de las Administraciones Públicas se publicarán los trámites electrónicos que podrán realizarse con esta representación.

Artículo 16. Plazos máximos de resolución de procedimientos.

En todos los procedimientos de competencia de la Administración del Principado de Asturias y de los entes locales radicados en Asturias, incluidos sus organismos dependientes, el plazo máximo en el que debe notificarse una resolución expresa finalizadora de un procedimiento será de tres meses, contados conforme establece la normativa básica estatal. Excepcionalmente, y de forma motivada, podrá establecerse un plazo superior, que en ningún caso podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

Artículo 17. Silencio administrativo positivo.

1. La falta de resolución y notificación en plazo en todos los procedimientos de competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de sus organismos públicos iniciados a solicitud del interesado a las que se aplica esta Ley tendrá efectos estimatorios, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en imperiosas razones interés general.
2. Se consideran razones imperiosas de interés general las que afectan al orden público; la seguridad pública; la protección civil; la salud pública; la preservación del equilibrio financiero del régimen de Seguridad Social; la protección de los derechos; la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores; las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales; la lucha contra el fraude; la prevención de la competencia desleal; la protección del medio ambiente y del entorno urbano; la política de vivienda social; la protección de la salud; la sanidad animal; la propiedad intelectual e industrial; la conservación del patrimonio histórico y artístico, y los objetivos de la política social y cultural.



Junta General del Principado de Asturias



3. Se exceptúan del a regla general del silencio administrativo contenida en el apartado 1 de este artículo los siguientes procedimientos:

- a) Los relativos al ejercicio del derecho de petición contenido en el artículo 29 de la Constitución.
- b) Aquellos casos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a terceros, facultades relativas al dominio público.
- c) Los de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
- d) Aquellos en los que la estimación suponga el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente o el patrimonio histórico.
- e) Los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. Sin embargo, cuando se haya interpuesto recurso de alzada contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por transcurso del plazo, se considerará estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase ni notificase resolución expresa, siempre y cuando no se refiera a los procedimientos contenidos en las letras a) a d) anteriores.
- f) Los procedimientos en materia de personal que pudieran implicar el reconocimiento o la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas.
- g) Los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.
- h) Los procedimientos tributarios de los que pudiera generarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas del obligado tributario, sin perjuicio de los efectos previstos en la normativa reguladora de cada procedimiento de aplicación de los tributos.

4. En los procedimientos de competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de sus organismos públicos iniciados de oficio el sentido del silencio se regirá por lo establecido en la normativa básica estatal y en la normativa sectorial aplicable.

Artículo 18. Plazos para emisión de informes en procedimientos administrativos.

- 1. El plazo de emisión de informes y dictámenes será de diez días, salvo que la normativa de la Unión Europea o del Estado, de directa aplicación o básica, establezcan otro plazo superior.
- 2. Excepcionalmente, podrá establecerse un plazo superior mediante norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general, en los términos previstos en el artículo 16, 2 de esta Ley.



Junta General del Principado de Asturias



3. Transcurrido el plazo máximo fijado para la emisión de los informes y dictámenes preceptivos necesarios para la resolución de un procedimiento administrativo sin pronunciamiento expreso y motivado del órgano competente para su evacuación, se entenderán emitidos en sentido favorable a la propuesta sometida a informe y a la continuación del procedimiento para su resolución por el órgano competente. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa básica respecto a la suspensión del plazo máximo para resolver y del sentido del silencio para los procedimientos iniciados a instancia de los interesados.
4. Cuando en un procedimiento deban emitirse diversos informes, estos se despacharán por sus responsables de manera simultánea y no sucesiva.

CAPÍTULO II **Régimen Sancionador**

Artículo 19. Disposiciones generales.

1. Los órganos competentes controlarán el cumplimiento de lo previsto en el artículo 13 de esta Ley, ejerciendo las facultades de comprobación y la potestad de inspección que legalmente les corresponden sobre el contenido de declaraciones responsables y comunicaciones.
2. Para la aplicación del presente régimen sancionador son competentes los titulares de las Consejerías competentes en la materia sujeta al régimen de declaración responsable o comunicación de que se trate. La competencia sancionadora corresponderá a las entidades locales en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa sectorial de la Comunidad Autónoma. Cuando la competencia sancionadora corresponda a las parroquias rurales, podrán ejercerla mediante acuerdos de colaboración interadministrativa conforme a lo establecido en la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas y de régimen local.
3. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir, las Administraciones públicas sancionarán, mediante resolución motivada, las infracciones cometidas en esta materia previa instrucción del oportuno expediente.
4. Si, en el marco de una actuación inspectora, se conociera la posible comisión de hechos constitutivos de infracción penal, deberá ponerse en conocimiento de la autoridad judicial competente.



Junta General
del Principado de Asturias



5. La instrucción de causa penal suspenderá la tramitación del expediente administrativo sancionador incoado por los mismos hechos y, en su caso, la eficacia de las resoluciones sancionadoras en los términos establecidos por la legislación básica estatal.

Artículo 20. Responsables.

Se consideran responsables de infracción de esta Ley quienes tengan la obligación de presentar declaración responsable o comunicación y realicen por acción u omisión hechos constitutivos de las infracciones que se detallan en los siguientes artículos. En caso de existir una pluralidad de responsables de una misma infracción, la responsabilidad será solidaria.

Artículo 21. Infracciones leves.

Son infracciones leves:

- a) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter no esencial, en cualquier dato contenido en la declaración responsable o comunicación aportada por los interesados.
- b) El incumplimiento de los requerimientos específicos o las medidas cautelares que formule la autoridad competente dentro del plazo concedido al efecto, siempre que se produzca por primera vez.
- c) La falta de subsanación de las deficiencias detectadas en inspecciones y revisiones reglamentarias en el plazo señalado en el acta correspondiente o la falta de acreditación de tal subsanación ante la Administración Pública competente, siempre que dichas deficiencias no constituyan infracción grave o muy grave.
- d) La falta de colaboración con las Administraciones Públicas en el ejercicio por estas de las funciones de comprobación, inspección y control reguladas en esta ley.
- e) El incumplimiento, por simple negligencia, de los requisitos u obligaciones establecidas en la normativa sectorial aplicable siempre que se produzca riesgo de escasa incidencia para las personas, la flora, la fauna, las cosas, la hacienda pública o el medio ambiente.
- f) La falta de comunicación a la Administración Pública competente de la modificación de cualquier dato de carácter no esencial incluido en la declaración responsable o comunicación.

Artículo 22. Infracciones graves.

Son infracciones graves:

- a) El inicio o desarrollo de las actividades o de la ejecución de proyectos a los que se refiere esta Ley sin la presentación de la correspondiente declaración responsable o comunicación.
- b) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o manifestación contenida en la declaración responsable o comunicación a las que se refiere esta Ley. Se considerará esencial, en todo caso, la información relativa a la



Junta General del Principado de Asturias



titularidad de la actividad, la naturaleza de esta, el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad en el ejercicio de la actividad, incluidas las relativas a la protección del medio ambiente, y de aquellas obligaciones que afecten a la salud de los consumidores y usuarios.

c) No estar en posesión de la documentación o el proyecto a los que hace referencia la declaración responsable o la comunicación, o bien la falsedad, inexactitud u omisión en el contenido de dicha documentación, así como la incorrecta certificación de cualesquiera de estas cuestiones.

d) La falta de firma por técnico competente de los proyectos que la requieran y la redacción de proyectos o memorias técnicas cuyo contenido no se ajuste a las prescripciones establecidas en la normativa aplicable.

e) La obstaculización del ejercicio de las funciones inspectoras.

f) El incumplimiento de los requerimientos específicos y de las medidas cautelares que formule la autoridad competente, cuando se produzca de modo reiterado.

g) La expedición de certificados, informes o actas cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos.

h) La falta de comunicación a la Administración Pública competente de la modificación de cualquier dato de carácter esencial incluido en la declaración responsable o comunicación.

i) La reincidencia en falta leve por la que se hubiese sido sancionado en el plazo de los dos años anteriores a la comisión de esta.

Artículo 23. Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves:

a) El incumplimiento doloso de los requisitos, obligaciones o prohibiciones aplicables a la actividad o proyecto de que se trate siempre que ocasionen riesgo grave o daño para las personas, la flora, la fauna, la hacienda pública, las cosas o el medio ambiente.

b) Las tipificadas como infracciones graves cuando de las mismas resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave e inminente para las personas, la flora, la fauna, la hacienda pública, las cosas o el medio ambiente.

c) La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración al personal inspector.

d) La reincidencia en falta grave por la que se hubiese sido sancionado en el plazo de los dos años anteriores a la comisión de esta.

Artículo 24. Reiteración y reincidencia.

1. Existirá reiteración cuando se cometa una nueva infracción de la misma índole, dentro del plazo de un año después de la anterior, sin que medie resolución firme en vía administrativa.



Junta General
del Principado de Asturias



2. Existirá reincidencia por la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, ya sancionada con anterioridad, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

Artículo 25. Medidas provisionales.

Las Administraciones Públicas competentes podrán adoptar aquellas medidas provisionales que consideren necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, las exigencias de los intereses generales, el buen fin del procedimiento o evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción.

Artículo 26. Prescripción y caducidad de las infracciones.

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. El plazo de prescripción comenzará a contar a partir de la fecha en que la infracción se haya cometido, y tratándose de infracciones continuadas o permanentes, el plazo de prescripción se computará a partir de la fecha de finalización de la actividad infractora. El inicio del procedimiento sancionador con conocimiento del interesado interrumpe la prescripción, reanudándose el plazo de prescripción si estuviera el expediente paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable o infractor.
2. El plazo máximo para resolver será de tres meses desde el inicio del procedimiento sancionador. Transcurrido este plazo, excepto que concurran causas que legalmente produzcan la suspensión del procedimiento, se producirá la caducidad de este.

Artículo 27. Sanciones.

1. Las infracciones previstas en este capítulo se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y no pecuniarias, que serán compatibles entre sí y podrán imponerse de manera simultánea en el caso de las infracciones graves y muy graves, en atención a la naturaleza de la infracción.
2. Las sanciones pecuniarias consistirán en una multa, fijada de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de esta Ley.
3. Las sanciones no pecuniarias podrán consistir en:
 - a) Suspensión definitiva o temporal de la actividad, de la ejecución del proyecto o clausura del establecimiento. En este último caso deberán determinarse en el acuerdo que se dicte las medidas complementarias para su plena eficacia.
 - b) Inhabilitación, por término máximo de tres años, para el ejercicio de la actividad o la promoción de proyectos análogos, para percibir subvenciones o beneficiarse de incentivos fiscales.



Junta General del Principado de Asturias



c) Resarcimiento de todos los gastos que haya generado la intervención a cuenta del infractor.

d) Decomiso de los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción y, en particular, de los derivados de actividades o proyectos que, debiendo tenerla, no cuenten con la declaración responsable o comunicación.

e) Obligación de restitución del estado de las cosas a la situación previa a la comisión de la infracción.

f) Pérdida de la acreditación de entidad colaboradora de certificación, que podrá imponerse por la comisión de infracciones graves o muy graves, y prohibición de obtener nueva acreditación, que podrá imponerse por la comisión de infracciones muy graves.

Artículo 28. Proporcionalidad.

La imposición de sanciones deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada conforme al principio de proporcionalidad y con la debida motivación, atendiendo para la graduación de las sanciones a los siguientes criterios:

- a) Gravedad del perjuicio ocasionado e imposibilidad de reparación de este.
- b) Cuantía del beneficio obtenido.
- c) Plazo de tiempo durante el que se haya cometido la infracción.
- d) Existencia y/o grado de intencionalidad.
- e) Existencia de reiteración o reincidencia en los términos recogidos en el artículo 24.

Artículo 29. Cuantía de las sanciones.

1. Las infracciones leves se sancionarán con multas de hasta 3.000 euros.
2. Las infracciones graves se sancionarán con multas de 3.001 euros a 60.000 euros.
3. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 60.001 euros a 1.000.000 de euros.

TÍTULO III

Instrumentos Facilitadores de la Simplificación Administrativa

Artículo 30. Actuación administrativa automatizada.

1. Como medida de simplificación, agilización y de reducción de cargas administrativas, se promoverá el uso de las actuaciones administrativas automatizadas, de conformidad con la normativa comunitaria y estatal de aplicación.



Junta General del Principado de Asturias



2. Las actuaciones administrativas automatizadas permitirán la descarga telemática de acreditaciones de actos o actuaciones contemplados en su norma de creación, en los que no hay intervención directa del personal empleado público, y que estarán sujetos a los sistemas establecidos en la normativa reguladora de la administración electrónica.
3. Se impulsará esta automatización en todas aquellas tareas, trámites y procedimientos administrativos susceptibles de realizarse sin intervención de las personas, al ser por su repetitivos o de mera revisión o comprobación de datos, especialmente en los supuestos de procedimientos de tramitación masiva, reduciendo los tiempos de respuesta, errores, costes y cargas administrativas para el ciudadano.

Artículo 31. Utilización de la inteligencia artificial.

1. Sin perjuicio de la regulación comunitaria y estatal en la materia, las Administraciones a las que resulta de aplicación esta Ley impulsarán la incorporación de soluciones basadas en inteligencia artificial para fomentar la mejora en la atención de los servicios públicos por parte de la ciudadanía.
2. La inteligencia artificial se podrá utilizar en la tramitación administrativa, y en especial en la búsqueda de trámites y la tramitación procedimental unificada.
3. En el empleo de herramientas de inteligencia artificial se garantizarán los derechos y libertades ciudadanos, debiendo cumplirse con la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal y de la inteligencia artificial.
4. Se harán públicos los sistemas algorítmicos o de inteligencia artificial con impacto en los procedimientos administrativos o en la prestación de los servicios públicos, describiéndose de manera comprensible su diseño y funcionamiento, así como el nivel de riesgo que implican y el punto de contacto al que poder dirigirse en cada caso, de acuerdo con los principios de transparencia y explicabilidad, en los términos dispuestos en la legislación en materia de transparencia.

Artículo 32. Carpeta de servicios al ciudadano y unidades de apoyo. Canal empresa.

1. Las Administraciones sometidas a esta Ley pondrán a disposición de los ciudadanos, en sus sedes electrónicas, espacios personalizados y único de relación electrónica, la carpeta de servicios al ciudadano, donde las personas podrán gestionar los servicios administrativos en los que se encuentren interesadas, consultar los procedimientos administrativos, comunicaciones y notificaciones electrónicas con dichas Administraciones.



Junta General
del Principado de Asturias



2. La carpeta de servicios al ciudadano deberá poner de oficio a disposición de la ciudadanía aquella información que resulte de su interés, y en concreto sus certificados, carnés y tarjetas personales, así como la vinculada al acceso a procedimientos y servicios solicitados por la ciudadanía de las Administraciones.
3. Los entes que integran la Administración local, a través de los correspondientes convenios, se adherirán progresivamente a la carpeta de servicios al ciudadano, para que, a través de esta, los interesados puedan consultar el estado del conjunto de sus expedientes.
4. Los ciudadanos que, en atención a sus circunstancias personales, sean incapaces de acceder a los servicios en línea o dispuestos en forma electrónica, contarán en cada Administración con una unidad de apoyo facilitadora de sus trámites de forma presencial. En los municipios de menos de mil habitantes de población censada, dicha unidad estará a cargo del Principado de Asturias. Los requisitos para el acceso a estas unidades, así como las condiciones de su funcionamiento, serán objeto de desarrollo reglamentario.
5. Cada Administración Pública sometida a esta Ley deberá contar con un espacio en su sede electrónica denominado “Canal Empresa” donde se informará de cuantos requisitos se precisen para el comienzo y desarrollo de iniciativas emprendedoras de profesionales o empresas, incluyendo las condiciones procedimentales que resulten de aplicación, con acceso electrónico a nada trámite requerido. En el supuesto de entidades locales de menos de mil habitantes censados, tal “Canal Empresa” deberá servirse del soporte del Principado de Asturias.

TÍTULO IV

Simplificación Normativa

Artículo 33. Análisis de las cargas administrativas de proyectos normativos.

En toda memoria de los proyectos o anteproyectos normativos en el Principado de Asturias se deberá realizar un estudio pormenorizado de las cargas administrativas que suponen, con la finalidad de valorar el impacto de la nueva regulación, reducir las cargas administrativas y evitar nuevas trabas innecesarias a la implantación y desarrollo de actividades, así como para fomentar la simplificación administrativa. En caso de ausencia de justificación sobre estos extremos, deberá dejarse sin efecto la iniciativa normativa. El contenido concreto de dicho estudio se regulará reglamentariamente.



Junta General
del Principado de Asturias



Artículo 34. Revisión del ordenamiento jurídico.

1. Con la finalidad de contar con entorno de seguridad jurídica que facilite el ejercicio de derechos ciudadanos, así como las inversiones productivas y el desarrollo de proyectos socioeconómicos sostenibles, el Principado de Asturias realizará anualmente una revisión del ordenamiento jurídico autonómico para adaptar las normas a los criterios de simplificación regulados en esta Ley. Mediante la suscripción del correspondiente convenio, podrá recabarse el asesoramiento en esta materia de instituciones jurídicas asturianas, que habrán de informar acerca de aquellas normas susceptibles de actualización o derogación, por su obsolescencia.
2. Esta revisión se podrá llevar a cabo de forma individual o mediante una única Ley, en la que se incorporen todas aquellas modificaciones normativas o derogaciones que se consideren necesarias.

Disposición adicional primera. Uso de lenguaje no sexista.

De conformidad con el artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, y el artículo 5 de la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la Violencia de Género, las referencias que en el texto de esta ley se hagan, en virtud del principio de economía de expresión, mediante el uso del masculino genérico se entenderán realizadas tanto en género femenino como en masculino.

Disposición transitoria primera. Régimen aplicable a procedimientos en tramitación.

Los procedimientos en tramitación a la entrada en vigor de esta ley se regirán por la normativa conforme a la cual se iniciaron

Disposición derogatoria única.

1. Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en esta ley.
2. Quedan expresamente derogadas las siguientes disposiciones con rango reglamentario: Acuerdos del Consejo de Gobierno del Principado de fechas 11 de enero de 2017, 29 de octubre de 2020 y 24 de mayo de 2024, de constitución, régimen y funcionamiento de la Comisión de Simplificación Administrativa.



Junta General
del Principado de Asturias



Disposición final primera. Adaptación de régimen de intervención, procedimientos y plazos de silencio e informes.

1. Dentro del plazo de seis meses contados desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno del Principado de Asturias aprobará y remitirá a la Junta General del Principado de Asturias, para su tramitación, un proyecto de ley de aplicación de la vigente Ley de simplificación administrativa y reducción de cargas burocráticas, que se atenderá estrictamente a los criterios establecidos en ella, con los siguientes contenidos:
 - a) Reformas legales necesarias para la sustitución de autorizaciones o licencias previas por declaraciones responsables o comunicaciones.
 - b) Reformas legales necesarias para la sustitución del silencio negativo por silencio positivo.
 - c) Reformas legales necesarias para la revisión de los plazos de silencio administrativo.
 - d) Reformas legales necesarias para la revisión de los plazos de emisión de informes y dictámenes.
 - e) Reformas para actualizar Leyes o derogaciones de aquellas Leyes obsoletas o que han dejado de aplicarse.
 - f) Procedimientos en los que la aportación inicial de documentación por los solicitantes se sustituye por declaración responsable, indicando el momento en que habrá de aportarse la documentación, y reformas legales necesarias para ello.
2. Dentro del plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley, el Principado de Asturias aprobará el procedimiento que se seguirá y los documentos que deberán cumplimentarse por los coordinadores de simplificación y el Grupo de Trabajo contemplados en los artículos 5 y 6 de esta Ley.
3. La efectiva sustitución de autorizaciones o licencias previas por declaraciones responsables o comunicaciones requerirá la aprobación de una norma reglamentaria posterior, que tendrá el siguiente contenido mínimo:
 - a) El momento a partir del cual se aplicará el régimen de declaración responsable o comunicación previa. Los procedimientos iniciados antes de ese momento continuarán tramitándose conforme a la normativa que fuese de aplicación al iniciarse.
 - b) Las tablas de cumplimiento, de modo que tanto los interesados como los órganos responsables del procedimiento puedan identificar de forma sencilla los requisitos y documentación precisa.
 - c) Los modelos de declaración responsable o comunicación.



Junta General
del Principado de Asturias



Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.

Se faculta a las Administraciones a las que resulta de aplicación esta Ley, en sus respectivos ámbitos de competencias, para dictar cuantas disposiciones fueran necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, siendo de aplicación en el presente ejercicio si se dispone de recursos para su financiación mediante cualquiera de los mecanismos previstos en el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias o, en todo caso, el mismo día que la próxima Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

No obstante, la efectiva aplicación de lo establecido en esta Ley respecto de concretos procedimientos, informes y régimen de aportación de documentación tendrá lugar con ocasión de la promulgación de las Leyes y Reglamentos previstos en la disposición final primera.

JUSTIFICACIÓN

Como consecuencia de que el contenido del Proyecto de Ley, que lleva en su título la “simplificación administrativa”, no constituye a juicio del Grupo proponente una norma sobre la materia en los términos en que se han venido promulgando en los últimos años en las distintas Comunidades Autónomas, al amparo de lo previsto en el artículo 148.2 del Reglamento proponemos este texto alternativo, que incluye cuantas figuras procede aplicar en el Principado para resolver el grave problema burocrático, al estilo de lo que se ha venido promulgando en derecho autonómico e introduciendo aquellas mejoras resultado de las experiencias comparadas y de la singularidad administrativa del Principado, con la idea de mejora técnica del texto legal propuesto sobre la materia de que se ocupa.

Palacio de la Junta General, 30 de junio de 2025. Álvaro Queipo Somoano, portavoz.